

**GINA BENAVIDES LLERENA**  
**Defensora del Pueblo del Ecuador (e)**

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS**



**COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE WISUYA Y RESGUARDO BUENAVISTA,  
TERRITORIO COLECTIVO BINACIONAL INDÍGENA SIONA EN  
INMINENTE RIESGO DE EXTERMINIO**

**Versión final:** 14 de enero de 2019

**Introducción**

Con fecha 7 de julio de 2018, Alonso Aguinda, Presidente de San José de Wisuya y Mario Alberto Erazo Yaiguaje, Gobernador del Resguardo Siona Buenavista solicitaron formalmente a la Defensoría del Pueblo de Ecuador que realice, de manera conjunta, con la Defensoría del Pueblo de Colombia una misión humanitaria, según sus palabras, “dada la grave situación en materia de Derechos humanos que enfrentamos por la presencia activa de varios grupos armados en la zona disputando el control territorial; presencia que a la fecha ha representado confinamiento por control de horarios y movilidad, nueva instalación de minas antipersonales”,<sup>1</sup> entre varias otras situaciones.

---

<sup>1</sup> Foja 2 del expediente defensorial No. DPE-1701-170104-19-2018-000835, petición formal de visita humanitaria realizada por correo electrónico.

Los días 25, 26 y 27 de agosto de 2018 una delegación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,<sup>2</sup> junto con la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, también de Colombia, la ONG Amazon Frontlines y una representante del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Sucumbíos,<sup>3</sup> realizaron una misión de verificación en el territorio indígena de la comunidad Siona/Kichwa de San José de Wisuya (en adelante Wisuya) y del Resguardo Buenavista (en adelante Buenavista) ubicados respectivamente en el nororiente ecuatoriano y suroriente colombiano, zona fronteriza de esos dos países.

En esos días, la Defensoría del Pueblo de Ecuador junto con las otras delegaciones, guiados por la Guardia Indígena Siona visitó varios lugares en el territorio indígena binacional para observar y verificar los hechos que a continuación se detallan. Durante ese recorrido, esta Institución Nacional de Derechos Humanos realizó un ejercicio de observación participante,<sup>4</sup> 37 entrevistas<sup>5</sup> y un registro audiovisual en el que se sostiene el presente informe.<sup>6</sup> Esta información se complementa con otra información de carácter secundario y se analiza en contraste con estándares internacionales y nacionales de derechos humanos.

El corte temporal sobre los hechos verificados en este informe son los años 2017 y 2018, con excepción del contexto sobre hechos de reclutamiento forzado y minado de territorio, ocurridos en años anteriores y que persisten hasta la actualidad.

### **Marco jurídico vigente**

Es relevante precisar que la Constitución del Ecuador vigente desde el 20 de octubre de 2008 incorpora a los instrumentos internacionales de derechos humanos como parte del ordenamiento jurídico y constituyen, después de la Constitución, norma jerárquica superior a las leyes orgánicas y ordinarias. Adicionalmente su contenido y la interpretación más favorable son de directa e inmediata observancia, cumplimiento y aplicación para todos los funcionarios públicos del país, sus delegatarios y concesionarios.

---

<sup>2</sup> A la misión de verificación asistieron: Gina Benavides Llerena, Defensora del Pueblo encargada para el período de transición; Francisco Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza; Jorge Acero, Delegado Provincial de Sucumbíos; Pamela Jaramillo, Directora Nacional de Educación y Capacitación; Alexandra Cárdenas Valladares, Directora Nacional de Derechos Colectivos, Ambiente y Naturaleza; Roberto Noriega, camarógrafo; Daniel Ichau y Miguel Albán, conductores de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El 23 de agosto de 2018 la Defensora del Pueblo emitió la Resolución No. 077-DPE-CGAJ-2018 que dispuso la respectiva Comisión de Servicios y autorización de viaje respectiva para todos los funcionarios.

<sup>3</sup> Doctora Silvana Sánchez.

<sup>4</sup> Sostenido en las notas de diario de campo.

<sup>5</sup> Sea a partir de entrevistas individuales o colectivas. Todas ellas fueron sistematizadas e incorporadas al expediente, por lo que su información ha sido declarada confidencial.

<sup>6</sup> Por la delicada información que se ha proveído, todo los testimonios son protegidos y por lo tanto confidenciales en tanto constituyen información personal la cual no puede ser ni publicada ni entregada.

Adicionalmente, dicha norma dispone como objetivo estratégico del Estado la integración con los países de América Latina y el Caribe, que incluye la promoción de estrategias conjuntas para la protección de ecosistemas y el agua, la armonización de legislaciones con énfasis en los derechos y regímenes migratorios, fronterizos, sociales, ambientales, culturales y de salud pública así como la promoción y protección de la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad y la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera.<sup>7</sup>

Este marco comprensivo de derechos humanos permite a esta Institución, en cumplimiento de su mandato previsto en el artículo 215 de la Constitución y de los artículos 8 literal k), 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo emitir el presente informe basado en el análisis de derechos humanos sobre los hechos verificados en el territorio.

Así, el presente documento constituye la versión final de la visita realizada y pone énfasis en las múltiples amenazas y vulneraciones a derechos humanos individuales y colectivos que enfrenta esta población ancestral indígena, amenazas y vulneraciones a derechos de la naturaleza y el riesgo inminente de exterminio físico y cultural por el confinamiento que las actividades extractivas y el conflicto armado están provocando.

Se evidencia, en términos generales, cómo las amenazas y riesgos a los habitantes y su territorio no se restringen exclusivamente a la zona bajo jurisdicción del Estado colombiano sino que se extienden también hacia la zona bajo jurisdicción del Estado ecuatoriano debido no sólo a las relaciones económicas, sociales y culturales de los habitantes Siona, incluida la movilidad fluvial a través de los ríos, sino también por el impacto de las actividades transnacionales lícitas e ilícitas que suceden en la zona y los impactos que éstas provocan.

## I

### **Territorio Indígena Binacional Siona**

En primer lugar se caracteriza de manera general al pueblo indígena Siona (ZioBain). Pueblo Amazónico asentado principalmente en territorio colombiano y también en territorio ecuatoriano, en las riveras del Río Putumayo. “El pueblo [Siona] tiene su propio sistema de autoridad tradicional, política y de ‘guardianía’, los cuáles se basarían en su poder en la espiritualidad vinculada a la toma del yagé y del yoco, las asambleas y la siembra de la chagra.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al respecto revisar los artículos 3 numeral 1; 10; 11 numerales 3, 7 y 9; 57; 417, 423, 424, 425, 426 y 427 de la Constitución del Ecuador.

<sup>8</sup> CIDH, 2018. Medida cautelar No. 395-18. Autoridades y miembros de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuna Blanco) del Pueblo Indígena Siona (ZioBain) respecto de Colombia. 14 de julio de 2018. Resolución No. 53/2018. Fojas 15 a 23 del expediente defensorial. Yagé y Yoco son dos bejucos

**Imagen No. 1**  
**Ceremonia del Yoco durante la vista**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Según la información que recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la actualidad habitan 2.578 personas en 6 resguardos y 6 cabildos en un total de 19.400 hectáreas repartidas en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito y Mocoa en Colombia; mientras que en Ecuador, según las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en 2010, los Siona son reconocidos como Nacionalidad, 611 personas se autoidentifican como tal y habitan principalmente en la provincia de Sucumbíos, en los cantones de Putumayo y Sushufindi.

El territorio donde se realizó la verificación corresponde a una zona geográfica específica atravesada por el cauce del río Putumayo, el cual, durante una gran parte de su recorrido, constituye el límite geográfico entre los Estados de Colombia y Ecuador. Se visitó a la Comunidad de Wisuya en el lado ecuatoriano del territorio y al Resguardo Buenavista en el lado colombiano. En conjunto, estas dos comunidades están integradas por familias Siona y Kichwa que se han juntado para pervivir y fundamentan su fortaleza en su espiritualidad que ha servido para la defensa del territorio con un mensaje expreso: “Queremos vivir en paz en nuestro territorio”.<sup>9</sup>

---

del que se extraen bebidas vinculadas a la actividad espiritual y física que realizan. La Chagra son los espacios de cultivo tradicional.

<sup>9</sup> Palabras de bienvenida de uno de los miembros del Consejo de Gobierno de Buenavista. Los testimonios por protección no son citados en función de la confidencialidad del expediente defensorial.



**Imagen No. 2**  
**San José de Wisuya territorio de paz**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Según relatos de los mayores de la comunidad:

*hace más de 50 años llegó una familia Kichwa por el río Yoyá, encabezada por “taita Casimiro”, ésta fue recibida por el “abuelo Pacho”, su llegada estaba marcada por el desplazamiento de la población kichwa a causa del boom cauchero. (...) En este contexto se teje la historia en la que el abuelo Pacho, taita de la comunidad Siona de Wisuya invita a taita Casimiro a una toma de Yajé y se teje una relación intercultural dialogante, la misma que permite una convivencia armónica e intercultural, actualmente varias de las familias de la comunidad se han constituido entre personas de las dos culturas.<sup>10</sup>*

Dicha zona geográfica se encuentra, aguas abajo, varios kilómetros al este de la desembocadura del río Cuembí, al norte del río San Miguel en Ecuador y al sur y oeste del río Piñuna Blanco en Colombia. Ambas conlindan y conforman una sola unidad territorial pero han sido divididas por la frontera entre Ecuador y Colombia demarcada por el río Putumayo, tal como se aprecia en el Mapa 1.

<sup>10</sup> Tomado de: Campo Imbaquingo, Catalina (2018). *Consultoría sobre afectaciones socioculturales al Pueblo Siona Kichwa de San José de Wisuya*. Que aparece en la investigación defensorial No. 283-2016.

**Mapa No. 1**  
**Territorio Indígena Binacional Wisuya/Buenavista**



**Fuente:** Alianza Ceibo, 2018. Editado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Para efectos de este informe se reconoce a estos dos territorios fronterizos como territorio colectivo binacional Wisuya/Buenavista en cuyas zonas se realizó la verificación que ahora se presenta, conforme al artículo 57 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Se precisa también que, tal como se aprecia en el mapa 1 de este informe, el sector más amplio del territorio de Buenavista (con líneas grises inclinadas) ubicado al noreste del río Piñuna Blanco ha sido solicitado formalmente como territorio de ampliación del resguardo al Estado colombiano. Sin embargo, la delegación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador no realizó verificación en ese lugar.

Una última precisión sobre la nacionalidad Siona en Ecuador y Colombia es que históricamente su territorio ancestral fue más amplio pero, debido al proceso de colonización amazónica, fueron despojados y actualmente enfrentan varias presiones y amenazas sobre el territorio que habitan.

*Tanto la Provincia de Sucumbíos y el Departamento del Putumayo forman parte de las Cuencas de los ríos Putumayo y San Miguel, que constituyen un espacio socio-*

*geográfico e histórico relativamente homogéneo. Esta región antes de la conquista española, estuvo habitada por varios grupos indígenas como los Mocoas, Tamas, Coreguajes, Encabellados, Orejones y otros, entre los que se destacan los Sionas, Cofanes, Huitotos e Inganos, todos emparentados con la familia lingüística Tukano Occidental que abarcaba territorios amazónicos de lo que hoy es Colombia, Perú y Ecuador. Estos grupos eran nómadas y seminómadas, dedicados básicamente a las actividades de caza, pesca y recolección de alimentos. Ocupaban y se desplazaban a través de trochas, quebradas y ríos como el Caquetá, Putumayo, Aguarico, Napo y otros que se encuentran tanto en territorio Ecuatoriano como Colombiano.<sup>11</sup>*

Ahora bien, respecto de este territorio binacional, en el artículo 57 de la Constitución del Ecuador expresamente constan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre los que destaca el reconocimiento de los territorios indígenas binacionales basado en los derechos de posesión y propiedad de tierras indígenas que fueron divididas, en su momento, por la demarcación de límites entre los Estado-nación en concordancia con el derecho más amplio a la autodeterminación como fundamento del resto de derechos colectivos.

La autodeterminación de los pueblos es una norma imperativa de derecho internacional general, es decir, “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario” de conformidad con el Art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En ese sentido, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Preámbulo, establece: “el reconocimiento pleno que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” En esa medida, el artículo 3 de esa Declaración, reconoce que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, por el cual determinan libremente su condición política”

En ese marco normativo de la autodeterminación, la Constitución del Ecuador reconoce dos derechos fundamentales relativos al territorio: 1) el de conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias las cuales son inalienables, inembargables e indivisibles y, 2) el de mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita; ambos derechos reconocidos en los numerales 4 y 5 del artículo

---

<sup>11</sup> Gardenia Chávez Núñez y otros, *Identidades en Construcción*, (Quito, Abya Ayala, Colección Antropología Aplicada 10, 1996): 117-118.

57. Este reconocimiento permite delimitar el espacio físico, social y cultural donde varios otros derechos colectivos se ejercen.

**Imagen No. 3**  
**Autodeterminación indígena**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Adicionalmente y complementando a estos dos derechos, el numeral 18 del artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo a mantener el contacto, las relaciones y la cooperación con otros pueblos indígenas, en especial aquellos territorios que han sido divididos por las actuales fronteras de los Estados-nación en tanto implica una afectación al carácter de indivisibilidad reconocido en el numeral 5 del artículo 57.

Ahora bien, este derecho colectivo reconocido en Ecuador se complementa y deber ser interpretado integralmente con el artículo 32 del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)<sup>12</sup> y el artículo 36 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas. Ambos artículos determinan que los Estados en cuya jurisdicción haya pueblos que habitan regiones geográficas que fueron separadas por el establecimiento de las actuales fronteras están obligados a adoptar las medidas apropiadas para facilitar el contacto, incluidas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, espirituales y relativas al medio ambiente.

Adicionalmente, es relevante informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución No. 53/2018 de 14 de julio de 2018 por la que otorgó medidas cautelares (No. 395-18) a autoridades y miembros de los Resguardos Buenavista

---

<sup>12</sup> Ratificado por Ecuador en 1998.



(Gonzaya) y Santa Cruz de Piñuna Blanco (Po Piyuya) respecto de Colombia. En opinión de la CIDH:

*...los **propuestos beneficiarios se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia**, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las autoridades Siona identificadas y las familias de los Resguardos Siona Gonzaya y Po Piyuya;<sup>13</sup> b) adopte las medidas de protección culturalmente adecuadas para que las autoridades Siona identificadas y las familias de los Resguardos Siona Buenavista y Po Piyuya puedan vivir de manera segura en su territorio, sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos. Tales medidas, además de que los cuerpos de seguridad profundicen sus esfuerzos o se adopten medidas más integrales y coordinadas, podrían, por ejemplo, incluir medidas para posibilitar sus desplazamientos de manera segura para realizar sus actividades culturales y de subsistencia; retirar el material explosivo existente en sus territorios o descartar la presencia de los mismos; prevenir y evitar el reclutamiento de jóvenes; y fortalecer los medios de comunicación para atender emergencias; c) adopte medidas culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de las autoridades Siona identificadas y puedan cumplir con el mandato que tienen según sus propias normas y sistema de gobierno en condiciones de seguridad; d) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes, de acuerdo con sus formas propias de toma de decisiones y sistema de autogobierno; y e) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.<sup>14</sup>*

Con este antecedente y caracterización general del territorio Siona donde se realizó la verificación, a continuación se presentan las amenazas estructurales al territorio Siona de Wisuya/Buenavista.

## II

### **Amenazas estructurales al territorio**

En esta sección se describen las amenazas externas que afectan al territorio colectivo indígena binacional de Wisuya/Buenavista y que constituyen causas estructurales que provocan vulneración de derechos humanos individuales y colectivos que se analizan más adelante.

#### **1. Extractivismo**

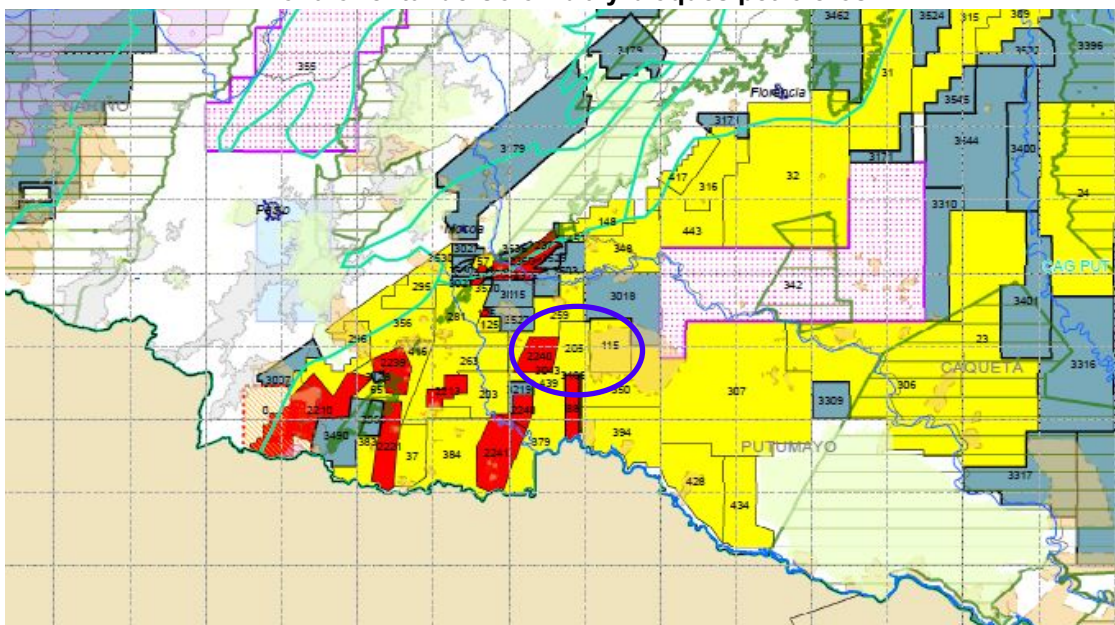
---

<sup>13</sup> Hace referencia al territorio del Resguardo de Piñuna Blanco, sin embargo se precisa que esta misión de verificación tampoco visitó dicho territorio.

<sup>14</sup> CIDH. 2018. Op. Cit. Párr. 3.

La zonas suroriental de Colombia y nororiental del Ecuador separadas por el Río Putumayo, de acuerdo con la información oficial de los dos Estados, constituye zona de exploración y explotación petrolera, como se aprecia en los Mapas No. 2 y No. 3 de este informe.

**Mapa No. 2**  
**Zona oriental de Colombia y bloques petroleros**



**Fuente:** Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, 2017.

Sobre el territorio de Wisuya/Buenavista se traslapan bloques petroleros y actividades de exploración y explotación a ambos lados de la frontera. Esa actividad petrolera está interconectada en los dos países por acuerdos y obras de infraestructura construidas por las empresas que operan en la zona para circular el petróleo hacia la costa pacífica ecuatoriana.

En Colombia, el bloque petrolero Platanillo, ya en explotación, tiene 17 pozos, según informa la página oficial de la empresa Amerisur Resources PLC de origen británico, a cargo de su operación. Este bloque colinda por el oeste con el territorio del Resguardo Buenavista. Adicionalmente, esta empresa explora y realiza actividades de sísmica en los bloques Putumayo-9 y Putumayo-12, al noroeste del resguardo afectando la zona de ampliación territorial solicitada oficialmente por Buenavista.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Disponible en la página web de Amerisur Resources PLC: <<http://www.amerisurresources.com/operations-colombia-paraguay/colombia-projects>>. Ingreso: 20 de octubre de 2018.

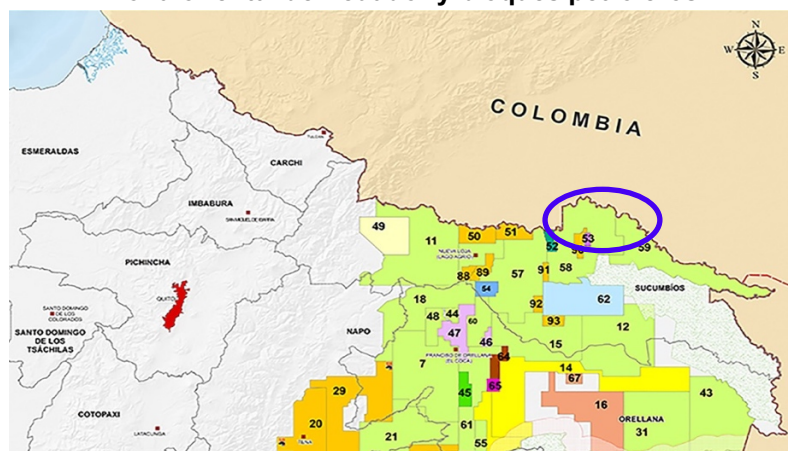
### **Mapa No. 3** **Bloques de Amerisur en el Putumayo**



**Fuente:** Reporte Anual de Amerisur Resources, 2017.<sup>16</sup>

Mientras que en Ecuador, la empresa pública Petroamazonas EP opera los bloques 58 (Cuyabeno-Tipishca-Huaico) y 59 (Vinita) en la zona de frontera y que se traslapa con el territorio indígena binacional Siona.<sup>17</sup>

### **Mapa No. 4** **Zona oriental de Ecuador y bloques petroleros**



**Fuente:** Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, 2017.

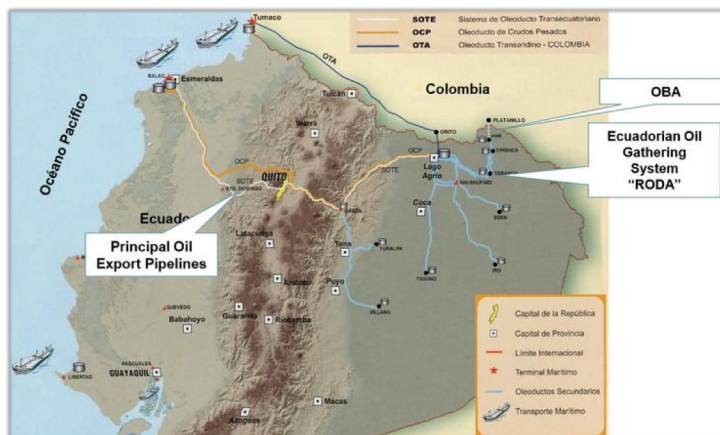
<sup>16</sup> Amerisur Resources PLC. 2018. *Annual Report 2017. Focused on Delivery*. Disponible en la página web: <<http://www.amerisurresources.com/images/rns-pdfs/Amerisur-Resources-plc-Annual-Report-2017.pdf>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>17</sup> Información disponible en el Informe "Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017" disponible en <<http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Revista-Informe-Anual-del-Potencial-Hidrocarburi%CC%81fero-2017.pdf>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

Estas dos empresas, Amerisur Resources PLC (privada)<sup>18</sup> y Petroamazonas EP (pública), en asociación mediante el “Convenio de Cooperación para el uso de la “Red de Oleoductos del Distrito Amazónico”, construyeron entre 2015 y 2016, sin proceso de consulta previa, libre e informada y sin licencia ambiental, el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA) de 20 kilómetros, que parte en el bloque Platanillo en Colombia, hace un cruce de 1400 metros de longitud por debajo del lecho del río Putumayo y avanza por territorio ecuatoriano hasta conectarse en la Estación Víctor Hugo Ruales a la Red de Oleoductos Secundarios (RODA).<sup>19</sup>

La construcción en Ecuador del OBA para interconectarse con la RODA provocó afectaciones al territorio de San José de Wisuya, vulnerando derechos colectivos y de la naturaleza, hechos que fueron ya analizados y verificados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en la Resolución No. 003-DPE-DNDCNA-2018-MP, de 24 de agosto de 2018, notificada en San José de Wisuya el 27 de agosto del mismo año durante esta visita.<sup>20</sup>

**Imagen No. 4**  
**El Oleoducto Binacional Amerisur**



**Fuente:** Energy-pedia news, 2015.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Amerisur Resources PLC y sus subsidiarias Amerisur Exploración Colombia y Amerisur Explor Ecuador.

<sup>19</sup> Información disponible en la página de youtube: <<https://www.youtube.com/watch?v=4lcf8rzTSx4>> y en el Informe Construcción del Proyecto OBA-RODA disponible en el siguiente link: <[http://www.amerisurresources.com/pdf/UpdateOBA%20Aug\\_Sept2015%20Spanish\\_V3.pdf](http://www.amerisurresources.com/pdf/UpdateOBA%20Aug_Sept2015%20Spanish_V3.pdf)>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>20</sup> Esta resolución es el resultado de la investigación defensorial con expediente No. 283-2016-DPE—DNDCNA-2016. En su parte resolutoria se reconoce que se vulneraron los derechos a la posesión ancestral de tierras, a la consulta previa, libre e informada y a la identidad cultural de los habitantes de San José de Wisuya así como los derechos de la naturaleza.

<sup>21</sup> Esta imagen está disponible en: <<https://www.energy-pedia.com/news/colombia/new-165835>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.



Las actividades petroleras que realizan tanto la empresa pública Petroamazonas EP en Ecuador como la transnacional privada Amerisur Resources PLC en zonas aledañas y dentro de ambos territorios en Colombia y Ecuador amenaza actualmente los derechos colectivos de este pueblo indígena binacional, como se verifica más adelante.

## **2. Conflicto armado y narcotráfico**

Adicional a la actividad petrolera transnacional, tanto los territorios aledaños como los de propiedad y posesión de los Siona en Wisuya/Buenavista, también enfrentan los impactos provocados por el conflicto armado y las disputas por el control de la plantación y procesamiento de coca, su tráfico y el control de minería y tala de árboles ilegal a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana. Es relevante mencionar que pese a los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, existen grupos armados irregulares que siguen operando vinculados a actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.

Un informe de Fundación Ideas para la PAZ (FIP) de abril de 2018 informa sobre el proceso de disidencia y reconfiguración de actores armados irregulares en el departamento de Putumayo:

*En Putumayo se evidenciaron indicios sobre la presencia de disidencias conformadas por ex-integrantes de los frentes 48 y 32. Por un lado, la disidencia del Frente 48 tendría cerca de 15 personas, al mando de “Wilder” o “Darwin”, quienes habrían salido del ETCR<sup>22</sup> de Puerto Asís. Por otro, se habla de un grupo de disidentes que estaría operando en el corredor que conecta los municipios de Villagarzón, Mocoa y Puerto Guzmán, y sobre las cuencas de los ríos Mandur y Caquetá, que se hacen llamar “Guardia Campesina Armada”. Otro grupo tendría presencia en San Miguel, en los límites con Puerto Asís y Valle del Guamuez, que desde finales de 2017 tendría presencia esporádica en el municipio de Puerto Caicedo. En Puerto Leguizamó, se denunció la presencia de una estructura llamada “Nuevo Horizonte”.*

*Estos grupos estarían reactivando el narcotráfico a partir de alianzas y acuerdos para el manejo de los diferentes eslabones de esta economía ilegal. Los sectores disidentes buscan controlar los topes de siembra de cultivo de hoja de coca y regular los precios de compra y venta de base de coca, además de la minería y tala ilegal de madera. Lo anterior supone una división de tareas y, además, revivir las viejas alianzas con grupos*

---

<sup>22</sup> Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: Servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, teniendo en cuenta el modelo de reincorporación comunitaria. Fuente: <[http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe\\_ETCR.pdf](http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe_ETCR.pdf)>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

como “La Construcción”, el cual se encarga de la comercialización y exportación de la droga hacia otros países.<sup>23</sup>

De la información recabada durante la verificación, este territorio indígena binacional enfrenta varias amenazas por la presencia de dos actores armados diferenciados:

- 1) Denominan grupos disidentes a grupos armados estructurados por ex miembros de las FARC rearticulados, delincuencia común y estructuras paramilitares, dedicados al narcotráfico y otros delitos. Pueden ser varios grupos diferenciados;
- 2) Los ejércitos de Ecuador y Colombia, que actúan bajo mandato legal pero que sus operaciones amenazan derechos humanos.

Estos grupos armados operan y atraviesan de manera indistinta los territorios indígenas a ambos lados de la frontera<sup>24</sup> provocando, entre otros impactos, constantes hostigamientos, amenazas y ataques contra la población, y de manera particular, contra sus líderes más representativos, así como un grave riesgo para la integridad y la vida de sus habitantes.

*Muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy contentos y a la vez también que nos de esa confianza de poder explicar algo o digamos o decir algo de lo que nos ha sucedido o nos ha venido sucediendo por la situación de los actores armados en la frontera, como bien sabe, aquí está la mafia, está la disidencia y los actores armados delincuenciales.*

*En paz hemos vivido nosotros, si no, no hubiéramos vivido, nadie nos puede traer la paz porque aquí siempre la hemos tenido, aquí el pueblo Siona se denomina una familia. Y la paz tampoco es traer como Estado (...) como hay actores armados entonces que nos manden ejército, que nos manden policías, porque eso es peor todavía*<sup>25</sup>

Es relevante en este informe precisar que la dinámica del conflicto armado no se restringe al territorio bajo jurisdicción del Estado colombiano. Todo lo contrario, en la misma medida que el río Putumayo garantiza la movilidad del pueblo Siona asentado a ambos lados de la frontera, los grupos armados y otros pobladores campesinos de la zona se mueven y actúan de manera indistinta a lo largo de su cuenca y en las dos

---

<sup>23</sup> Fundación Ideas para la Paz (FIP). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Resumen ejecutivo. Disponible en: <<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ad26d9a90c6f.pdf>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>24</sup> Los ejércitos de los Estados de Ecuador y Colombia operan sólo bajo su jurisdicción y no se identificó en este recorrido casos de actividades por fuera de sus territorios.

<sup>25</sup> Testimonios protegidos. Sistematización de entrevista narrativa: misión de verificación San José de Wisuya, 2018. Defensoría del Pueblo de Ecuador.

riberas y con ello las actividades que realizan, por lo tanto sus impactos y efectos se extienden también a territorio bajo jurisdicción del Estado ecuatoriano.

Así, el territorio colectivo indígena binacional de Wisuya/Buenavista en la actualidad enfrenta amenazas derivadas de la actividad transnacional de la extracción de petróleo como por las operaciones de los grupos armados irregulares que se disputan el control del territorio para actividades ilícitas de narcotráfico, minería y tala de bosques. Es en ese contexto que la misión de la Defensoría del Pueblo de Ecuador verificó las diversas vulneraciones a derechos humanos que se detallan a continuación.

### III

## **Verificación de derechos humanos**

Entendiendo las dinámicas territoriales existentes a ambos lados del río Putumayo (frontera), a continuación se detalla las amenazas y vulneraciones a derechos humanos más significativas que fueron verificadas en territorio.<sup>26</sup>

#### **1. Falta de reconocimiento del territorio colectivo binacional**

La comunidad de Wisuya ubicada en la jurisdicción del Estado ecuatoriano y el Resguardo de Buenavista ubicado en la jurisdicción del territorio del Estado colombiano, conforman una unidad territorial indígena binacional que, para efectos de este informe, se la denomina Wisuya/Buenavista. Su existencia como territorio binacional ha sido reconocida por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad en Ecuador y de Colombia.

El territorio de la comunidad de Wisuya, que comprende 2.420 hectáreas, es de posesión ancestral el cuál, hasta la fecha, no ha sido adjudicado por el Estado ecuatoriano. Distinto del territorio de Buenavista que sí ha sido reconocido como resguardo por Colombia y cuenta con título colectivo de propiedad desde el año 1983, comprendiendo 4.500 hectáreas. Buenavista, además, está litigando un proceso judicial de restitución de tierras en el que se incluye ampliar el resguardo a una zona de 52.000 hectáreas.

En ese contexto y de la información recabada durante la misión de verificación, en la práctica, las personas, familias y comunidades divididas por el río Putumayo mantienen

---

<sup>26</sup> Es probable que otras situaciones problemáticas se presenten, sin embargo se pone atención en los conflictos que actores externos provocan en el territorio y que amenazan a la vida cotidiana de los habitantes del territorio.

históricamente relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en las que el río significa unidad, movilidad, fuente de abastecimiento y puente entre los dos territorios. No se identifica al río como frontera, sino que su proceso de memoria se remonta en el tiempo para determinar la posesión y propiedad de la tierra perteneciente a un solo pueblo, pero afectado por la imposición del límite de los dos Estados.

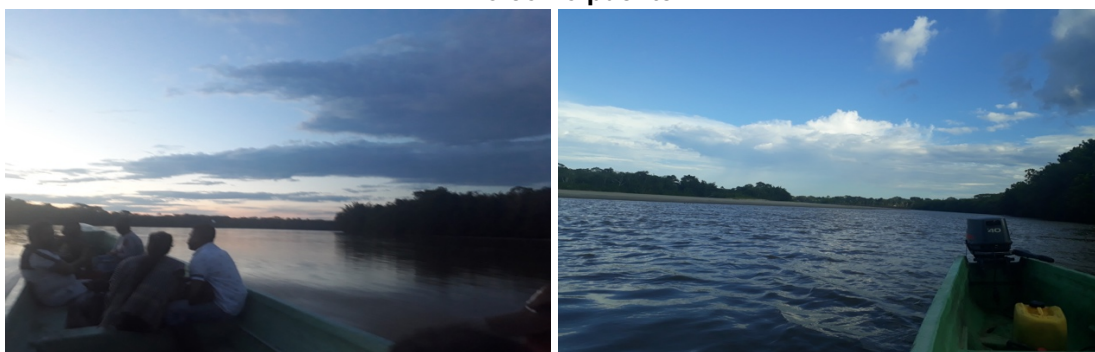
*...siempre hemos sido golpeados, como pueblos de fronteras, hemos sido golpeados injustamente y hemos venido padeciendo ante esta situación que es casi un atentatorio digamos contra la vida nuestra y de los pueblos indígenas y de los que vivimos aquí*

*Para los Estados, la diplomacia, allá es Colombia [señala el territorio cruzando el río, en la orilla norte del Putumayo], acá es Ecuador [tierras en la orilla sur del Putumayo]. Aquí no existe frontera para nosotros.*

*Por eso esa voz de resistencia que estamos haciendo nosotros en este momento, haciéndoles conocer a las entidades estatales, haciéndonos conocer nosotros mismos como Pueblos ancestrales de este territorio, porque nosotros no hemos venido aquí a este territorio, nuestros abuelos han existido milenariamente en esta rivera. Y estamos reclamando, no lo que no es nuestro. ¡Esto es nuestro! Por eso es que estamos diciendo, queremos vivir en paz, queremos estar en nuestro territorio...*

*Aquí lo importante es que reconozcan la parte territorial nuestra, ahí está todo, nuestra vida supermercado, farmacia ahí está todo, que se reconozca nuestro territorio y que se respete [...] sino tenemos territorio no tenemos nada.*

#### **Imagen No. 5** **El río como puente**



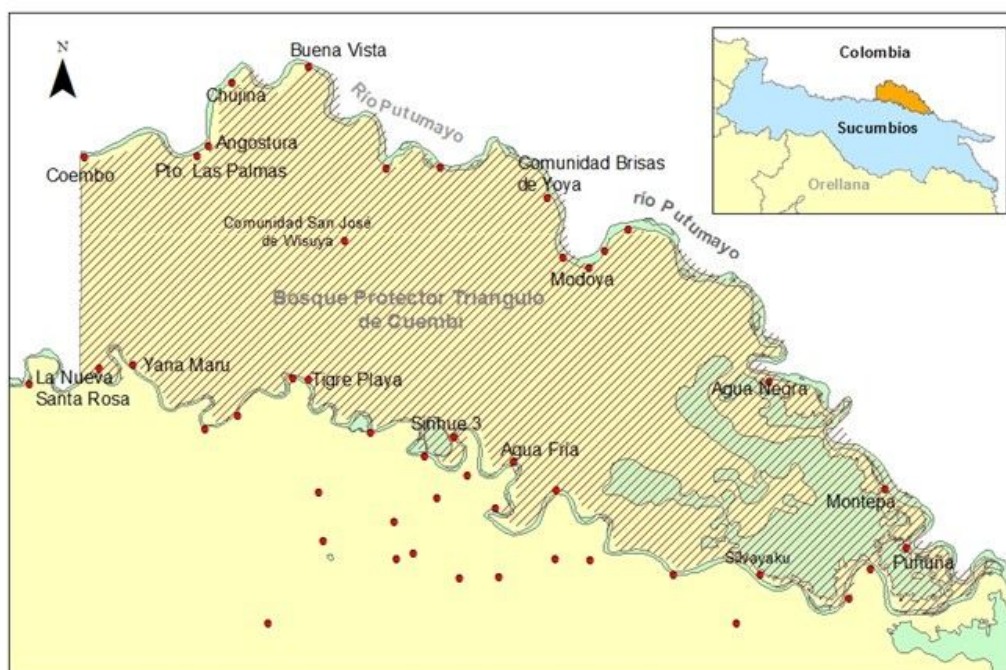
**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Pese a que en la práctica las dinámicas dan cuenta de una unidad territorial indígena continua y con alta movilidad, los Estados de Colombia y de Ecuador no han garantizado un plan binacional que asegure ni la integración ni el efectivo ejercicio de derechos humanos para estas personas, familias y comunidades Siona.



Al contrario, en Ecuador y respecto del territorio de Wisuya, adicional al traslape de los bloques petroleros 58 y 59 en operación y los impactos provocados por la construcción del OBA por Amerisur Resources PLC, el territorio Siona enfrenta dos restricciones impuestas por el Estado. En primer lugar, la declaratoria realizada en 2010 por el Ministerio del Ambiente a la zona como Bosque y Vegetación Protectora “Triángulo de Cuembi” a 104.238 hectáreas ubicadas en las parroquias de El Carmen de Putumayo, Palma Roja y Santa Elena, entre los ríos San Miguel y Putumayo.<sup>27</sup>

**Imagen No. 6**  
**El triángulo de Cuembi y las restricciones al territorio**



**Figura 5: Ubicación de principales comunidades afectadas por la declaratoria del de Bosque protector Triángulo de Cuembi**

**Fuente:** Ministerio del Ambiente, Unión Europea y Care, 2018<sup>28</sup>

Esta declaratoria, pese a que ahí viven comunidades indígenas y campesinas, tiene varios efectos detallados en el acuerdo ministerial: 1) impedir que las tierras existentes puedan ser adjudicadas al dejar de ser patrimonio de la actual Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (antes el INDA); 2) prohibición de licencias para actividades forestales pero no para actividades extractivas; 3) se excluye del área del bosque protector sólo a los centros poblados de Santa Elena, Santa Rosa y El Palmar no a comunidades rurales, y; 4) sólo se reconoce,

<sup>27</sup> Acuerdo No. 80 del Ministerio del Ambiente, de 13 de mayo de 2010, publicado en el R.O. No. 239 de 20 de julio de 2010.

<sup>28</sup> Información disponible en: <<https://slideplayer.es/slide/13974669/>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

como parte integrante del área a los asentamientos indígenas y las tierras con título de propiedad previos. Además, la protección y control del bosque se encarga al Ministerio de Defensa Nacional.

Es significativo llamar la atención que pese a que en los considerandos de la resolución se habla sobre el derecho a vivir en un ambiente sano, el *sumak Kawsay*, el desarrollo sustentable, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, dentro del Bosque Protector dos bloques petroleros (58 y 59) a cargo de Petroamazonas EP están operativos en fase de explotación, a través de él ha cruzado el OBA y, a la vez, constituye el obstáculo normativo para la adjudicación de títulos colectivos a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

En segundo lugar, la existencia de las zonas de seguridad de frontera, previstas por la Ley de Seguridad Pública y del Estado constituyen otro límite para el territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista. Según el artículo 39 de esa ley, la zona de seguridad abarca el espacio de veinte kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior y el artículo 40 prohíbe a las personas naturales o jurídicas extranjeras la posesión, adquisición y concesiones de tierras en dichas zonas con excepción de los espacios poblados y urbanos ubicados en dichas zonas, o cuando se trate de matrimonios y uniones de hecho legalmente reconocidas con 5 años de duración o personas jurídicas nacionales cuyos socios extranjeros se encuentren domiciliados en el país por el lapso de 5 años. Esta limitación afecta a todos los territorios colectivos indígenas binacionales, incluido el de Wisuya/Buenavista.

Estas dos imposiciones, la del bosque protector y la zona de seguridad de frontera, ambas a cargo del Ministerio de Defensa, significan en la práctica un efecto adicional, la militarización del territorio.

Sobre este punto es importante precisar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona que el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas involuntariamente divididos por fronteras estatales, por su naturaleza, es diferente al reconocimiento de otros que se ejercen dentro de la jurisdicción de un solo Estado. Su implementación, dice la OIT, “exige medidas políticas, administrativas y legales de más de un Estado”,<sup>29</sup> en este caso Ecuador y Colombia, medidas que deben necesariamente fundamentarse en una relación “amistosa y de cooperación sobre la

---

<sup>29</sup> Organización Internacional del Trabajo – OIT. 2009. *Los derechos de los pueblos indígenas en la práctica – Una guía sobre el convenio No. 169 de la OIT*. Pág. 165. Disponible en la página web: < [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@normes/documents/publication/wcms\\_113014.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_113014.pdf)>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

cual puedan establecerse acuerdos específicos para la implementación de este derecho”.<sup>30</sup>

Al respecto, tanto Colombia como Ecuador reconocen en leyes secundarias nacionales la facultad que tienen para acordar “zonas de integración fronterizas”, las que deberán, en el caso de pueblos indígenas, garantizar procesos de consulta previa, libre e informada para su conformación.<sup>31</sup> En 2011, mediante convenio bilateral, ambos países reestructuraron la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana creada en 1989,<sup>32</sup> comprometiéndose a fortalecer, según lo establece el artículo 2 literal c), “el proceso de integración, a través de la gestión ante las entidades correspondientes para el diseño de planes, programas y proyectos binacionales y la coordinación de mecanismos, acciones y procedimientos para su implementación”. En ese marco, de acuerdo al artículo 12, conformaron cinco Comités Técnicos Binacionales (CTB): 1) asuntos fronterizos; 2) infraestructura y energía; 3) asuntos ambientales; 4) asuntos económicos y comerciales, y; 5) asuntos sociales y culturales.

Sin embargo, llama la atención que en dicha Comisión y sus respectivos CTB no se haya tomado en cuenta la particular situación que enfrentan los pueblos indígenas binacionales y que, como resultado, no exista un plan de integración fronteriza que garantice los derechos colectivos, entre otros, del territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista pese a que el proceso de integración va a cumplir, en 2019, 30 años.

En consecuencia, los Estados de Ecuador y Colombia están obligados a reconocer el carácter binacional del territorio indígena Siona de Wisuya/Buenavista que se deriva del derecho a la autodeterminación de las comunidades que habitan en él y constituye el primer paso para la constitución de un plan y zona específica de integración que facilite el respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos de sus habitantes.

Así concebido el territorio, este informe también aporta en la interpretación que se debe hacer del territorio indígena binacional. Al respecto, como se dijo previamente, los numerales 4 y 5 del artículo 57 de la Constitución garantizan la posesión y propiedad de las tierras ancestrales, las cuáles deben ser adjudicadas gratuitamente, bajo el

---

<sup>30</sup> *Ibíd.*, *ídem*.

<sup>31</sup> En Colombia, revisar el artículo 5 de la Ley No. 191 de 23 de junio de 1995 por la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera. En el caso de Ecuador revisar los artículos 4 numeral 11, 7, 8, 20, 25 y 42 y de la Ley de Desarrollo Fronterizo de 17 de mayo de 2018. Y en el caso de los dos países el Convenio de Tránsito entre Ecuador y Colombia de 1992 (R.O. 83 de 9 de diciembre de 1992); el Reglamento de Derechos Humanos entre Ecuador y Colombia de 1997 (R.O. 4 de 17 de febrero de 1997); y el Memorando de Entendimiento por el cual se reestructura la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana. (R.O. 516 de 19 de agosto de 2011).

<sup>32</sup> El 20 de junio de 1989 se firmó la Declaración Presidencial Barco-Borja por la cual se creó esta Comisión.

entendido de que no todas las tierras en donde habitan estos pueblos y nacionalidades han sido adjudicadas ni constituyen título formal o legal de propiedad.

Este reconocimiento, no sólo de la propiedad sino también de la posesión ancestral de tierras de los pueblos indígenas, se complementa con el estándar internacional de derechos colectivos más progresista. En efecto, los numerales 1 y 2 del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT determinan que los Estados deben reconocer la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, así como las tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” y por lo tanto garantizar en dichas tierras la protección efectiva del conjunto de sus derechos humanos, individuales y colectivos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay de 2006 señala que:

- 1) *la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado;*
- 2) *la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro;*
- 3) *los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe...”<sup>33</sup>.*

Adicionalmente, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, en el artículo 25 reconoce que la propiedad y posesión de tierras indígenas implica también el derecho a “mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado...”. Estándar que se refuerza con la interpretación realizada por la Corte IDH al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos del que se deriva el reconocimiento del vínculo que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, incluyendo los elementos incorporales que se desprenden de ello. Así lo ha manifestado en la Sentencia de 27 de junio de 2012 por el fondo y reparaciones emitidas en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador:

*Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción*

---

<sup>33</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 128



*clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas”.<sup>34</sup>*

En consecuencia, la posesión tradicional de territorios en sí misma constituye título pleno de dominio. Por lo que, en el caso específico, el Estado ecuatoriano está obligado a adjudicar gratuitamente el título de propiedad colectivo a la comunidad San José de Wisuya en aplicación del numeral 5 del artículo 57 de la Constitución, incluso afectando a la declaratoria de bosque protector existente así como conciliando la existencia de franjas de seguridad a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas.

Por otra parte, se debe adelantar un proceso de integración fronteriza en los territorios de San José de Wisuya y del Resguardo Buenavista coordinado por los Estados de Ecuador y Colombia, en garantía del numeral 18 del artículo 57 de la Constitución.

Resta decir en esta sección que la unidad territorial indígena binacional Wisuya/Buenavista está conformada por las tierras de actual ocupación que sirven no sólo para vivienda y actividades de subsistencia sino también como el espacio social donde se ejercen derechos colectivos culturales reconocidos en los numerales 1, 8, 9, 10, 12 y 13 del artículo 57 de la Constitución que incluye: desarrollar libremente su identidad y su sentido de pertenencia; el desarrollo de sus tradiciones ancestrales, entre ellas, las prácticas de manejo de la biodiversidad, derecho propio, formas de convivencia, organización social, el ejercicio de la autoridad y varios conocimientos colectivos como la práctica de medicina tradicional en sus rituales sagrados, entre otros.

Es en ese espacio donde se han vulnerado varios otros derechos que se detallan a continuación.

## **2. Limitaciones al libre tránsito por el territorio**

Otra vulneración de derechos humanos verificada en el territorio es el límite impuesto, bajo amenazas de muerte, al libre tránsito de las personas por parte de grupos armados irregulares que prohíben circular durante la noche entre las 18:00 y las 6:00 en el territorio Wisuya/Buenavista, es decir, tanto en el territorio del Estado ecuatoriano como del colombiano.

---

<sup>34</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 145.

De la información recabada se evidencia que la única forma de movilizarse a esas horas es a través de permisos otorgados por estos grupos armados irregulares, caso contrario, tal como refirieron algunos de los habitantes de Wisuya, existe riesgo para la integridad y la vida:

*Claro pues por lo menos como ahorita no se puede andar desde la seis, de noche no le dejan andar es peligroso. Pasado de eso nosotros tampoco podemos andar porque hay un peligro y riesgo a la vida. [Los grupos irregulares] mandan un panfleto que uno no sabe ni como lo mandan. De la noche a la mañana lo riegan. Por eso fue la razón que pasando incluso una vez que yo venía y eran las 18:30 ya me pararon aquí abajo (...) armadamente (...) no estaban con uniforme, no estaban nada, de civiles y con pistola: es prohibido pasar, haga el favor y se recoge...*

*[Entrevistador pregunta si eso sucedió cerca del centro de Wisuya] Sí, aquí mismo en esta comunidad, aquí abajito nomas cerca de la curvita y como a los dos días después ya le dispararon a otro señor, que había estado subiendo cerca de Buenavista. Porque es también es parte de la comunidad, ya le dispararon, le hicieron dos tiros...*

*[Entrevistador pregunta si le dispararon al cuerpo] Pues ahí como es de noche pues pudieron haberle disparado, ahí no le podemos decir cómo fue. No le hirieron al compañero, entonces eso es lo que había sucedido.*

Varios testimonios recabados durante la visita confirmaron de esta restricción al libre tránsito impuesta por los grupos armados irregulares que se han reconfigurado en la zona después del proceso de paz en Colombia y su actual disputa por controlar el territorio. Para los habitantes de Wisuya/Buenavista este hecho provoca temor y afectaciones a la integridad psicológica así como al modo de vida cotidiano: cacería, pesca, ceremonias de yagé y yoco, así como el acceso a la educación y a la salud cuando sucede fuera del territorio o el transporte y provisión de alimentos que vienen de fuera de la comunidad.

*Parecemos mendigos, estando en nuestra misma tierra. Hoy en día, lo que dice la abuela, pues ya la gente no puede circular bien, no podemos ir hasta nuestras casas ceremoniales, no podemos ir a pescar, a la cacería porque nos surtimos de la madre naturaleza también, porque nos da miedo salir.*

De manera directa, la imposición de un toque de queda bajo amenaza y ataques directos a la integridad de las personas afecta gravemente a la libertad de tránsito y de residencia reconocida en el numeral 14 del artículo 66 de la Constitución y constituye uno de los hechos que vulneran la prohibición de militarización de territorios indígenas sin su consentimiento, reconocido en el numeral 20 del artículo 57 de la Constitución, en concordancia con el artículo 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, ambos fundamentados en el contenido más amplio

del derecho reconocido en el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT que establece que se deberá prever sanciones “contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos...”<sup>35</sup>

Así lo ha reconocido la Corte IDH en la sentencia a favor de los miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, de 30 de noviembre de 2016, al señalar que “el derecho de circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que permitan ejercerlo”, tal como ocurre con el toque de queda impuesto por actores armados irregulares en estos territorios. Estos hechos, para el caso de Colombia, han sido informados a la CIDH y ha servido de fundamento para la emisión de medidas cautelares en julio de 2018.<sup>36</sup>

### **3. Afectaciones a los derechos a la vida y la integridad**

A la disputa entre grupos armados irregulares por el control del territorio y el toque de queda impuesto, se suma también las operaciones que realizan los ejércitos de Ecuador y Colombia, hechos que en conjunto incrementan el riesgo en la zona. A la fecha existe un acumulado de hostigamientos, amenazas y ataques de los que son víctima varias personas y familias dentro del territorio Wisuya/Buenavista.

Al respecto la CIDH en su Resolución No. 53/2018 refiere que la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido, entre otros, que el Resguardo Buenavista, parte del Pueblo Siona, se encuentra en *proceso de inminente exterminio* y que hasta ahora la respuesta estatal “no ha logrado mitigar la situación de exposición y amenaza permanente que afrontan las autoridades, líderes y miembros prominentes de las comunidades indígenas”.<sup>37</sup>

En ese contexto, en el párrafo 7 de la resolución de la CIDH se detallan una serie de hechos sucedidos desde el 2017 y durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018, que constituyen hostigamiento, amenazas y ataques para los habitantes de Buenavista, poniéndolos en grave riesgo y que incluyen: obligación de los habitantes, bajo amenazas o coacción, de colaboración con los grupos armados regulares o irregulares, sea como informantes<sup>38</sup> o como proveedores de bienes o de descanso; el cruce

---

<sup>35</sup> Artículo 18 del Convenio 169 de la OIT.

<sup>36</sup> CIDH. 2018. Resolución 53/2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida cautelar No. 395-18 de 14 de julio de 2018. Párr. 7. “Actores armados ilegales habrían advertido (...) de la realización de controles de seguridad por tierra y agua, estando prohibido circular –incluso con amenaza de muerte– de 6:00 pm a 6:00 am, a menos de obtener un salvoconducto o permiso emitido por un determinado actor armado ilegal”.

<sup>37</sup> *Ibíd.*, Párr. 5.

<sup>38</sup> Incluso el ejército de Colombia solicita información a los habitantes sobre los grupos irregulares.

constante de grupos armados, regulares e irregulares, a través del territorio, la instalación de campamentos<sup>39</sup> y la ocupación ilegal de casas y fincas; nuevos procesos de minado para proteger lugares estratégicos para grupos armados irregulares; hostigamiento y riesgo para la integridad y la vida por estar en el medio de enfrentamientos entre grupos armados, sean regulares o irregulares; secuestro y otras retenciones ilegales; amenazas de muerte, en especial por colaborar con otros grupos a partir de declararles objetivo militar; ataques directos a la integridad y la vida, y; el reclutamiento forzado de niños, adolescentes y jóvenes.<sup>40</sup>

En este difícil contexto, a continuación se presentan varios testimonios recabados durante la misión de verificación de personas y familias que habitan en Wisuya. Como se ha dicho previamente, es especialmente grave que los hechos de violencia que enfrentan las personas, familias y comunidades no se restringen al territorio bajo jurisdicción del Estado colombiano, sino que se extienden y afectan también al territorio bajo jurisdicción del Estado ecuatoriano, entendiendo además que las dinámicas y las relaciones sociales de los habitantes de Wisuya/Buenavista suceden a lo largo del territorio y a través del Río Putumayo en la misma medida en que los grupos armados irregulares lo hacen.

**Imagen No. 7**  
**Rivera ecuatoriana del río Putumayo**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

La presencia de grupos irregulares armados a ambos lados del Putumayo significa también hostigamientos, amenazas y ocupaciones ilegales de hogares y fincas en el lado ecuatoriano donde el temor se ha convertido en riesgo real para la integridad y la

<sup>39</sup> Tanto ejército de Colombia como grupos irregulares instalan campamentos en la zona.

<sup>40</sup> CIDH. Op. Cit. Párr. 7 y 16. Sobre el reclutamiento forzado y el territorio minado se analizan más adelante en secciones específicas por la gravedad de estos hechos.

vida de sus habitantes, en particular para mujeres, niños y niñas así como personas adultas mayores, tal como se evidencia en el siguiente testimonio.

*Esto es triste para el pueblo porque si uno reclama los derechos entonces los actores dicen no. Hay que acabar lamentablemente y así es como lo hicieron, con este personaje, porque está jodiendo mucho. Y veníamos de una reunión y decían: es que los indios joden demasiado y nos miran pasar con un bastón y dicen ahí va el indio que jode tanto. Durante estos últimos días, meses, se han metido a mi casa gente para que duerma, armada debajo de mi casa y uno sin saber en qué momento puede uno dejar de existir por reclamar nuestros derechos*

*Eso ha ocurrido varias veces. En este año fueron 2 veces. Se metieron 3 armados a mi casa. Actores de la mafia. Yo me quedé ahí porque uno no sabe, yo tengo mis hijos y uno no sabe, mi hija ya está señorita, la violen o mi hijo lo cojan, se lo lleven y de que eso entonces es muy doloroso y de que eso entonces en mi casa fue muy triste, ya no podía salir al baño ni nada porque me tocó estarme ahí quietico no más, fue muy duro.*

*Como dice la mayora y los mayores, hoy en día ya no podemos dormir tranquilos. Uno no sabe, en qué momento rondan por nuestros territorios, motos, carros, y uno ¿qué tiene? Meterse a su casa y estar calladito porque si no, ni siquiera mirar.*

*Eso significa el riesgo, de que los niños la familia empecemos como a sentir miedo pánico a decir vámonos de aquí. Otra situación de que repercute entre nosotros es que los niños ya no van a poder estudiar ya no van a poder estar bien porque saben de qué ahí hay gente, o saben de qué a su padre o a cualquier líder en cualquier momento puede fallecer. Nos preocupa la familia la parte psicológica a pesar de que uno como líder sea fuerte y duro pero la familia no y de que sienta también de que otros grupos lleguen y digan ¡no, yo le apoyo! Pero no eso es para peor.*

Como se relata, estas preocupaciones producen afectaciones graves a la integridad física y psicológica de todos los miembros del núcleo familiar. Adicionalmente, es importante recalcar que no constituyen hechos aislados sino que se suman a las acciones sistemáticas que los grupos armados irregulares realizan en territorio de Wisuya/Buenavista independientemente de a qué lado de la frontera demarcada por el Río Putumayo sucedan. Se cita para ejemplificar otro testimonio recabado en el lado ecuatoriano por una mujer adulta mayor.

*A la casa si me llegaron en el día, llegaron armados y me pidieron que les regalara agua, y les di de tomar porque no puedo hacer más, no puedo decir no váyanse no tengo agua porque a todos dos nos toca servir tanto a ellos como a los militares, porque nos da miedo, porque si me pongo a aclarar dicen no, a esta señora le vamos a matar. Por eso no hemos dado la declaración muchos antes porque nos da miedo.*



*Mi hijo ya fue amenazado de la gente esa. En la casa aquí dijeron que aquí en la casa nos barrian a todos desde la familia, yo pensar eso yo lloraba mirando a mi hijo. Yo pensar decía no pues lo van a venir a matar a mi hijo, mi hijo decía mami a todos nos van a venir a matar. [Llora profundamente] Dios mío nos quieren matar a todos, me da pesar yo soy una mujer adulta, yo no me aguanto nada, me dio rabia y dije pues si son capaces que nos vengan a matar porque nosotros no debemos nada y no vinieron. Mi hijo pasaba para arriba para abajo, mamá ¿qué hago yo, qué voy a hacer? A mí me dolía mucho mirar a mi hijo que andaba así todo desesperado.*

Respecto de las tareas del ejército ecuatoriano se tiene información sobre posibles actos de hostigamiento, que incluyen atentados a los cocinaderos de remedio, donde se preparan medicinas tradicionales como parte del ejercicio de derechos culturales, tal como se recoge de los dos testimonios relatados a continuación:

*El ejército ecuatoriano andan por el río no más, hace rato que si andaban por aquí patrullando pero andan más bien haciendo daño. [En el] cocinadero de remedio, los abuelos, eso van les botan las ollas, las agüitas que tienen preparadas ahí a don Felinto se le llevaron las ollas..*

*Más encima los sectores armados y más encima las fuerzas del Gobierno, pero no para proteger sino para venir, atropellar, entrar a los cocinaderos de remedio, sabotear nuestra medicina, botar las ollas de remedios, llevárselas porque piensan que estamos cocinando otras cosas y eso lo desconoce el Gobierno, lo desconoce el Estado y así lo conozcan pues quieren acabar con nosotros, con nuestra vida.*

En ocasiones, la población de Wisuya ha quedado confinada entre las operaciones de los grupos irregulares armados y los ejércitos de los Estados, hecho que puede provocar desplazamiento forzado. En el testimonio que se cita a continuación, un habitante de Wisuya optó por salir de la zona durante 3 meses a otra comunidad, para proteger su vida, después de que grupos irregulares armados y el ejército ecuatoriano realizaran actividades sin su autorización, bajo amenazas de muerte por un lado y de coacción y de criminalización por el otro lado, dentro de su casa.

*En diciembre del 2017, llegaron aquí, yo estaba sentado así, otro compañero estaba también aquí unos días ayudando a trabajar, sembrando lo que es la agricultura, entonces llegaron como seis personas encapuchadas. Los vi entrar por la puerta con pistola en mano y de una vez ahí nos sacaron afuera, pero nosotros decíamos nos van a matar y ellos dijeron nos dan permiso. Como esto antes era tierra y por cuestión de enfermedad yo lo entable para no estar pisando la tierra, y como aquí vivo solo, llegaron ellos nos sacaron y nos dijeron que les dejáramos cavar. Destruyeron todo esto absolutamente, entonces nos tenían amenazados y ahí nos dijeron usted habla alguna cosa de nosotros, nosotros venimos y los matamos, y de ahí no sé cómo fui con miedo con miedo a donde un compañero dirigente y avanzamos a avisarle a la compañera: mire pasa esto.*

*Entonces la compañera dijo que dejemos como estaba ahí, que no lo cubramos, entonces nos tuvieron amenazados por un período porque vuelta volvieron, a los ocho días volvieron y dijeron se quedan con la boca callada. Entonces qué vamos a hacer nosotros, aguantar. Cuando volvieron de nuevo a seguir cavando, entonces supuestamente se identificaban que eran de una organización, explicaron que eran de las FARC mismo, eso es lo que les llegamos a entender. Me hicieron incluso coger aves, hacerles cocinar y todo este tiempo estuvimos como amedrentados y uno se siente nervioso no sabe qué hacer porque la vida es lo más lindo que dios nos ha dado.*

*Cuando a los dos tres días de que llegó ese grupo que nos tenían amenazados y amedrentados, vuelta llegó el ejército del Ecuador. El ejército vuelta llega a decir que aquí han sacado armas y también me tuvieron dos días, sería como secuestro entonces aquí me tenían amedrentado también, a mí me toco cogerles las gallinas a cocinarles yo mismo para servirles, y todo eso me tuvieron, no me permitían salir a nadie, ni entrar a nadie y no podría ni como avisar a los compañeros de la guardia y entonces eso fue lo que sucedió también aquí. Y el ejército en vez de brindar la seguridad más bien es como una inseguridad para uno entonces no sentimos esa confianza. Lo único que me decían es que yo soy de las FARC, que cuantas armas tienes, que dónde están las caletas, que tienen un sinnúmero de preguntas que uno no les puede responder absolutamente. Yo lo único que dije: bueno pues, si me van a llevar preso entonces más bien llévenme que por lo menos ahí me van a dar seguridad, eso fue uno de los sucesos que me pasó.*

#### **Imagen No. 8**

##### **Relato de uno de los hostigamientos**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Adicional a los hostigamientos, amenazas y ataques que se producen tanto por grupos irregulares como por el ejército ecuatoriano, las familias de Wisuya informaron que los inconvenientes con el ejército colombiano son frecuentes y contribuyen a aumentar el riesgo inminente que existe en el territorio de Wisuya/Buenavista.

*No, con el ejército ecuatoriano no habido esa situación tan difícil. En cambio, con los colombianos cuando pasan por el territorio pues nosotros si les hemos parado. [¿Por qué entran sin autorización? Pregunta el entrevistador] Sí, entran sin autorización y en veces han querido acampar (...) Buscan estrategias, a veces se van por el caserío y otros se van por el fondo, cuando ya se sale a cazar las pocas veces que se arriesgan ya se encuentran en los caminos cuando ya han transitado.*

A estos testimonios se suman otros que confirman la existencia de amenazas de muerte contra dirigentes; el secuestro y la retención temporal de personas a quienes se les obliga a realizar trabajos para beneficio de los grupos irregulares, y; otras ocupaciones ilegales de casas y fincas para que les provean de servicios y descanso.

Así, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha verificado que los “múltiples eventos de riesgo concretos ocurridos [durante el año 2017] hasta meses recientes de 2018, los cuales incluyen amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones en el libre desplazamiento de personas Siona [e incluso confinamiento], y actores armados que buscarían consolidar su presencia (...) e imponerse como autoridades por sobre las originarias”,<sup>41</sup> tal como lo ha analizado la CIDH, también sucede en territorios de Wisuya, es decir, en fincas, viviendas y territorio colectivo indígena bajo jurisdicción del Estado ecuatoriano.

Es relevante agregar que la organización Amazon Frontlines, mientras este informe se redactaba, remitió información vía correo electrónico sobre dos nuevos hechos ocurridos los días 14 y 22 de noviembre de 2018.

*14 de noviembre de 2018. Sobre las 11H00 miembros del ejército ecuatoriano del Batallón de Selva 55 ubicado en EL Palmar ingresan por el puente colgante a la comunidad de Wisuya acompañados con 2 civiles encapuchados., bajaron caminando hasta donde el Sr. [nombres protegidos] indicando que estaban haciendo un censo comunitario, sin embargo piden solo los nombres y cédula de los hombres de estos domicilios. Ese mismo día ingresarn al cocinadero de remedio del Mayor [nombre protegido] y piden los datos y la cédula del taita.*

*22 de noviembre de 2018. Sobre las 2H00pm el [nombres protegidos] retornaba de Cantagallo después de haber retirado dos motoguadañas donadas por el gobierno provincial para la comunidad de Wisuya, en el bus, a la altura de la gabarra de los ríos San Miguel, subió un hombre mestizo de aproximadamente 29 años, vestía uniforme de Petroamazonas EP, se sentó al lado de el sr [nombre protegido] y le dijo “[nombres protegidos] y usted son los que andan denunciando a las petroleras, por tanta denuncia van a dejar de trabajar en la zona y la gente se va a quedar sin trabajo, se están*

---

<sup>41</sup> Ibid., párrafo 26.

*buscando que los pelen por sapos". El señor se bajó nuevamente del bus a la altura de la comunidad Brisas del Putumayo. Cuando llegó a la comunidad, su mamá le dijo que habían rumores de que lo iban a matar por estar denunciando a la empresa.<sup>42</sup>*

Estos últimos acontecimientos evidencian una relación entre la violencia, el hostigamiento, las amenazas y ataques que reciben, no sólo con las actividades ilícitas en la zona sino también con las lícitas. En ambos casos, los actores de estos hostigamientos y amenazas son funcionarios ecuatorianos (el ejército y una empresa pública). Es relevante recordar que Wisuya fue peticionaria de la Defensoría del Pueblo por la construcción del OBA de Amerisur para conectarse con la RODA de Ecuador para exportar petróleo.

Esta serie de hechos sucesivos y generalizados, que ejecutan los grupos armados irregulares presentes en la zona, sumando a las operaciones que realizan los ejércitos colombiano y ecuatoriano, algunos de ellos que han derivado también en hostigamientos y ataques, así como ciertos hostigamientos vinculados a las operaciones petroleras ponen en riesgo inminente los derechos a la vida, la integridad física y psíquica y a vivir libres de violencia de las personas, familias y comunidades de Wisuya/Buenavista, derechos reconocidos en los numerales 1 y 3 literales a y b del artículo 66 de la Constitución del Ecuador, y que repercute de manera indirecta en el derecho a vivir dignamente en el territorio, también reconocido en el numeral 2 del mismo artículo constitucional.

Adicionalmente, y al tratarse de territorio colectivo indígena, todos estos hechos contribuyen a evidenciar la vulneración a la limitación de actividades militares en sus territorios, obligación reconocida como parte del derecho colectivo en el numeral 20 del artículo 57 de la Constitución del Ecuador en concordancia con el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT. Se debe recordar que cualquier acción de los ejércitos ecuatoriano y colombiano deben obligatoriamente contar con la consulta previa, libre e informada y la autorización expresa de las autoridades de Wisuya/Buenavista tal como lo determina el artículo 30 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esta Defensoría del Pueblo también concluye que el riesgo que enfrentan las personas que viven en Wisuya a sus derechos a la vida e integridad implica una situación grave, urgente y de posible irreparabilidad, en los términos que ha planteado la CIDH en relación al Estado colombiano y el territorio de Buenavista. Al respecto, la organización Amazon Frontlines informa que, según censo comunitario, en San José de Wisuya habitan 82 personas, entre ellos, 6 personas adultas mayores y 32 personas menores de 18 años, de estas últimas, 16 son niñas y otros 16 niños. La organización específica

---

<sup>42</sup> Información remitida por correo electrónico de 28 de noviembre de 2018. Por el contenido de la información es confidencial.

que 8 personas requerirían de protección especial por los hechos directos que se han ejecutado en su contra.

Resta decir que tanto el reclutamiento forzado como las amenazas que enfrentan por el minado del territorio, pese a que han sido mencionadas en esta sección, se analizan de manera particular en las dos siguientes secciones por la gravedad que revisten estos hechos.

#### **4. Reclutamiento forzado, especialmente de niños y adolescentes**

Si bien este informe tiene como corte temporal hechos sucedidos entre 2017 y 2018, este acápite presenta toda la información recabada en la zona en relación al riesgo de reclutamiento forzado que enfrentan los habitantes del territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista, en especial niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya en el 2016 alertaba sobre la gravedad del reclutamiento en el departamento de Putumayo en Colombia.

*En años recientes, la Defensoría del Pueblo y los pobladores advirtieron del aumento progresivo del reclutamiento, entre ellos indígenas, especialmente por parte de la guerrilla. Los obligan a realizar diferentes actividades de apoyo a la organización como transporte de mercancías y correo humano. En algunos casos, les ordenan actuar en calidad de milicianos. Hay numerosos niños y niñas reclutados forzosamente en situación de orfandad, especialmente indígenas awá. La ausencia de opciones educativas y el acceso limitado a servicios básicos son otros factores que preocupan y que terminan por expulsar a estos jóvenes hacia los grupos ilegales. La cada vez mayor presencia de la fuerza pública en el territorio también ha provocado tensiones con las comunidades indígenas y, en especial, con los jóvenes, quienes denuncian amenazas y hostigamientos.*

*De acuerdo con la información recopilada por la UARIV<sup>43</sup> en el Putumayo en el período 1985 – 2015 se han registrado 341 NNA víctimas de reclutamiento forzado. Desde el año 2001 se incrementó esta problemática y se mantuvo relativamente constante hasta 2013.*

*Entre 2001 y 2013 fueron forzosamente reclutados 285 NNA putumayenses, es decir el 83,5 % de los vinculados desde 1985. En estos 13 años se presentó un promedio anual de 22 casos. Los municipios en los que ha habido mayor afectación por esta conducta ilegal son Puerto Guzmán (75 casos), Puerto Asís (72), Mocoa (46), Puerto Leguizamó (45), Orito (31) y Valle del Guamuéz (30).*

*Según información recopilada por la Fiscalía General se “logró constatar que al menos 29 menores hicieron parte de las filas” del Bloque Sur Putumayo de las AUC, pese a*

---

<sup>43</sup> Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

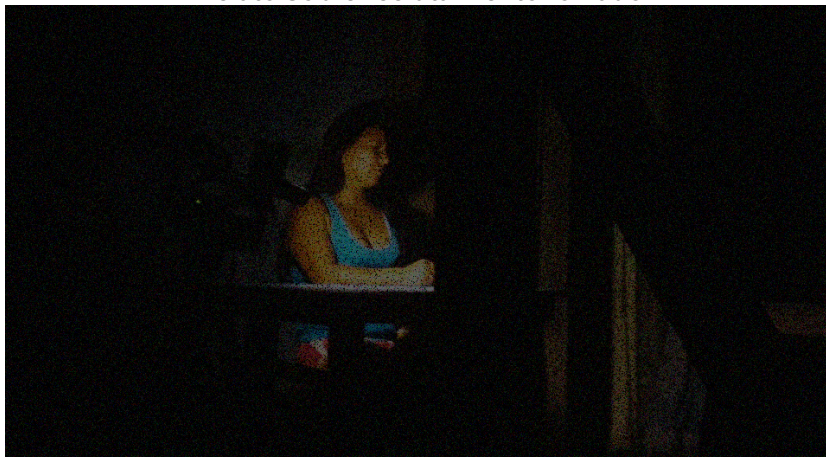


que el 'reglamento' de este grupo ilegal exigía la mayoría de edad como requisito para ingresar.<sup>44</sup>

Durante la verificación que realizó la Defensoría del Pueblo de Ecuador, se registró algunos casos de reclutamiento forzado, entre ellos, de niños y adolescentes nacidos o que habitan en Wisuya, territorio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano. Situación que confirma cómo la violencia que se deriva del conflicto armado no se restringe a la jurisdicción del Estado colombiano. A continuación se registra el testimonio sobre un niño ecuatoriano que habría sido reclutado hace 5 años.

*Bueno el caso mío, de mi hijo, que él estaba internado en el otro lado, en Buenavista [Buenavista]. De allá una familia lo convidaron a él, lo engañaron, se lo llevaron y entonces él estaba allá. Antes él estaba aquí en la casa, los profesores me dijeron a él que lo internará allá, yo como madre lo interne allá y bueno, de ahí, no sé nada de él hasta ahora. Si de ahí, los mismos familiares míos lo engañaron diciendo que allá le pagaban buena plata a él y por eso se fue él. Va a tener 18 años. Él se fue de 13 años. Hace 5 años ya y no le han encontrado en la Carmelita,<sup>45</sup> no han sabido nada de él. Si de ahí yo fui allá, llegaron unos, allá en Buenavista, dijeron que venían a ayudar a buscar, pusimos una denuncia tampoco me han dado solución de nada. No conocemos el paradero de él, si está vivo o está muerto. Fue el Frente 48. En Colombia es nacido él, pero vivíamos acá. Tiene los dos papeles, el doble registro.*

**Imagen No. 9**  
**Relato sobre reclutamiento forzado**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018.

El caso relatado se suma a una serie de hechos de reclutamiento que sucedieron en los dos últimos años en el territorio de Wisuya/Buenavista en el que, al menos, siete niños y adolescentes fueron reclutados, probablemente por las FARC y sus disidencias.

<sup>44</sup> PNUD. 2016. *Putumayo. Análisis de conflictividades y construcción de paz*. Colombia: PNUD y cooperación Sueca. Págs. 48-49. Disponible en < <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-putumayoconflictividades-2016.pdf>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>45</sup> Hace referencia al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado en la vereda de la Carmelita, municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo.

*Ahora mismo hay personas, niños perdidos de las familias que las FARC mismo les engañan, digamos es engañado porque hay niños pequeños de 10 y 11 años que los llevan y hasta ahora se sabe de la vida de ellos. Es engañado porque hay niños pequeños que los llevan, a jóvenes que teníamos aquí ahora no sabemos el rumbo, no sabemos dónde están. Si yo le pongo nomas, están como 5, como 7 niños en total. El menor sería de unos 10 años y de ahí el resto de 14 y 15 años. Las FARC como que los llevó y de ahí para acá nadie da razón de ellos.*

*En esta año no, porque ya no hay. Entonces supuestamente hay una disidencia, oigo que están reclutando, así mismo acá estamos con mucho cuidado para que nuestros jóvenes no caigan en ese rol y más bien estén dentro de la guardia orientándolos con los mayores con los abuelos para que no dejemos que esas cosas vayan sucediendo.*

*Ellos vienen los llaman a los montes, por ahí los ofrecen los conquistan les ofrecen bueno de todo a todo y entonces se dejan convencer y ahí los van llevando y les dan el arma y les llevan a los conflictos yo creo.*

Hay que recordar que en la sección anterior se registraron varios incidentes de retenciones temporales que realizan los grupos armados irregulares para obligar a colaborarles en actividades específicas: comida, descanso, transporte y otros. A continuación se cita un testimonio de un joven ocurrido mientras sucedía una ocupación ilegal de una vivienda, hechos que corren el riesgo de convertirse en reclutamiento forzado.

*...me dijo vea mijo, me dijo, a usted lo necesitamos para que nos haga una vuelta, así directamente me dijo necesitamos que usted nos haga una exploración hacia adentro donde usted vive porque vamos a entrar a recibir un cargamento. Así como comprometiéndome, yo le dije, como para impresionarle, le dije bueno, si ya no hay otra manera bueno. Entonces dijo, listo usted sale ahorita más tardcecita a las seis en punto, nos encontramos adentro a 40 minutos de la orilla del río hacia adentro. Bueno yo llegue y me fui, miré bien, todo estaba bien, normal porque ahí no había presencia del ejército. Y cuando yo iba regresando a una escuelita que hay en esa vereda y cuando ellos ya estaban ahí, que iban llegando, me dijo, e mijo como le fue con la misión. Yo le dije bien todo bien le dije yo. Dijo mire, aquí le presento al camarada que va a estar en esta zona me dijo, para que usted lo distinga, y me lo presentó, pero solamente de mano. No me dijo el nombre, nada.*

*Días después me dijeron, vea mijo, dijo, usted quiere trabajar con nosotros, mire aquí le ponemos todo, me ponían las armas y todo y me decían usted quiere trabajar con nosotros no le va a faltar nada, tendrá su sueldo, dijeron, como convenciéndome. Yo le dije todo está bueno, pero yo allá yo sé en qué es lo que estoy, yo tengo mi trabajo que hacer. Entonces tranquilo mijo pero piénselo me dijo, entonces yo bueno. Y dijo, por si acaso aquí le dejamos un número de teléfono por si acaso usted me quiera llamar o alguna información.*

Estos casos de reclutamiento o posible reclutamiento provocan temor fundado en todas las familias del territorio ante la posibilidad de que niños, adolescentes y jóvenes, puedan ser reclutados, bajo distintas modalidades que van desde el ofrecimiento de dinero, el engaño y hasta el rapto. El miedo que tienen afecta directamente a la vida

cotidiana de las familias, en especial, cuando los niños y niñas, adolescentes y los jóvenes deben realizar actividades solos, por ejemplo ir a la escuela.

*La otra de las situaciones, digamos, los jóvenes, la niñez bajo el impacto económico y bajo el abandono en el que estamos aquí en nuestros territorios ha hecho que muchos de nuestros jóvenes migren a buscar una economía para otros lados. Eso nos tiene muy preocupados. Buscan empleo, buscan trabajo, entonces ahí están los sectores armados que dicen venga yo le pago tanto, trabaje conmigo. El otro dice, venga yo le pago también, venga conmigo, siembre tantas hectáreas de coca y la gente en estos lados, busca cómo mejorar y como tener cómo vestirse y todo eso.*

*Ellos [se refieren a instituciones del Estado ecuatoriano] tienen que venir mirar cómo estamos, los niños que ellos deben ir a la escuela pero aquí no se puede mandarles por la carretera porque, de pronto, esa gente les coge a los niños y se los lleva. Entonces a nosotros nos da miedo que vayan solos, entonces hasta eso que vaya por el río. Aquí no ha pasado, antes no. A veces vienen a cogerlos pero no, uno toca capacitar hablarles a ellos y decirles que no que ellos no son para eso, están estudiando.*

*A ver, tenemos miedo que nuestros hijos e hijas o algún familiar pueda desaparecer, por eso queremos exigir al Estado que haya más garantía, como más seguridad, más garantía por ejemplo hay muchos programas en Colombia hay alimentación, nutrición, deporte, para el estudio. Ahí el estudiante no va pensar en irse, para que ellos estudien va a ver más opción. Hay dos formas como para fugarse, el uno yo quiero irme voluntariamente le dan algo de dinero [vía engaños] y la otra es que se lo lleven a escondidas y no lo vean más y eso obliga [a la fuerza].*

Respecto de estos hechos, en Ecuador el Código de la Niñez y de la Adolescencia determina con claridad la obligación del Estado de protección especial de niños, niñas y adolescentes en caso de conflicto armado así como la prohibición de reclutamiento, derivados de la protección de la Constitución a este grupo de atención prioritaria.

**Imagen No. 10**  
**Niña de Wisuya durante la visita de verificación**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018.

Y desde la perspectiva penal, constituye delito contra las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (artículo 127 del Código Orgánico Integral Penal –

COIP) con una ampliación en el rango de edad respecto del Estatuto de Roma al configurarse el reclutamiento en niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Además constituye delito de trata de personas (artículo 91 del COIP).<sup>46</sup>

Esta doble obligación estatal de prevención y sanción a responsables debe ser leída a la luz del contenido más amplio de la obligación estatal constante en el *Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación e niños en los conflictos armados*, ratificado por el Ecuador el 7 de junio de 2004 que en términos generales dispone:

#### *Artículo 4*

- 1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.*
- 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.*

#### *Artículo 7*

- 1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.*
- 2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.*

Así frente a estos hechos, el Estado ecuatoriano está obligado a: 1) prevenir el reclutamiento forzado que estaría afectando a niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que viven en el territorio de Wisuya; 2) investigar y sancionar a los responsables, y; 3) colaborar con el Estado de Colombia para poder prevenir esta grave violación a los derechos humanos en el territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista.

## **5. Confinamiento territorial por minas y otros explosivos**

Otra grave vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad de tránsito de las personas, familias y comunidades de Wisuya/Buenavista que se registró

---

<sup>46</sup> En efecto, el literal e) del numeral 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se consideran a estos hechos como crimen de guerra en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional. El estatuto expresamente menciona el “reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades”.



durante la misión de verificación es el uso de minas antipersona (MAP) y de artefactos explosivos improvisados (AEI) como manera de “contener transitoriamente la acción ofensiva de las Fuerzas Militares, evitando la confrontación directa, [y que constituye] otro factor (...) que ha conllevado al confinamiento de poblaciones y/o al desplazamiento forzado de muchos pobladores”.<sup>47</sup> Esta situación ha sido verificada en el Departamento de Putumayo por el PNUD en su informe de 2016. Entre 1992 y 2015 un total de 215 civiles y 216 militares murieron por minas antipersona.

**Imagen No. 11**  
**Artefactos explosivos improvisados (AEI) olvidados en Wisuya**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Si bien el hecho del territorio minado afecta de manera significativa al lado colombiano, según los testimonios y el registro realizado en Wisuya, muy cerca al centro poblado de la comunidad, a unos 15 a 20 minutos caminando, se registró la existencia de artefactos explosivos improvisados sin estallar, en una de las orillas del río Wisuya, es decir en territorio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano.

*Hay un riesgo inminente y real. Además de este lado [señala en el mapa a Wisuya, territorio en Ecuador] hay unos artefactos explosivos no explosionados resultado del conflicto armado que de alguna forma habrá que ver como retirar porque están sobre quebradas o sobre caminos de acceso a chágas y áreas de cacería y recolección, y como son artefactos grandes se los ve, estos son artefactos grandes como cilindros*

<sup>47</sup> PNUD. 2016. *Putumayo. Análisis de conflictividades y construcción de paz*. Colombia: PNUD y cooperación Sueca. Pág. 49. Disponible en < <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-putomayoconflictividades-2016.pdf>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.



*bomba que lanzaron y nunca explotaron pero que están ahí y que obviamente suponen un riesgo.*

A este hecho específico se suma la verificación, durante el recorrido por el río Piñuna Blanco, dentro del territorio del Resguardo Buenavista, bajo jurisdicción del Estado colombiano, al visitar la casa de un taita Siona ubicada en la orilla de un pequeño riachuelo cercano a la comunidad Puerto El Silencio y en cuyo camino de ingreso y la zona posterior a su casa y finca se han sembrado minas antipersona (MAP).

*Esta es una zona la cual venía el ejército muy continuamente, entonces la guerrilla, venía a sembrar las minas para evitar que pasen, pero eso entonces, venía el ejército. Pero allá donde están esas plantas es la casa de remedio donde se toma yagé y pese a lo que había las plantas medicinales, que estaba ya sembrado el remedio, el ejército violaba este territorio, digamos, entonces no importaba si había yagé, nada, sino que entraban no más y lo mismo los otros se armaban. Entonces el mayor tuvo que salir de aquí, porque se sentía encerrado en medio del conflicto, por ejemplo al fondo, donde él tiene unas plantas medicinales, allá no podemos entrar, pero allá el primer estudio la vez pasada fue donde, como dice el mayor se mataron ellos mismo cogiendo la mina y estaba cerquita donde estaban las plantas medicinales.*

*Fueron cortando, el ejército hacia sus campamentos, había yagé, fueron cortando, los cambuches ahí y fueron a poner las minas y salieron muertos los otros. Eso es lo que ha pasado y eso ha repercutido mucho, porque el mayor se sintió y tuvo que salir de aquí desplazado por temor al campo minado. Y lo otro es que en el contexto espiritual, no se puede desarrollar lo que es la espiritualidad, los rezos y todo lo que maneja la medicina tradicional, entonces hoy, vuelve el mayor, instala nuevamente y se encuentra de que en el patio de su casa, está la otra mina.*

*Hoy en día se reconfiguran nuevos actores armados como el paramilitarismo, las disidencias, la mafia y el mismo Estado, que comienza a patrullar otra vez estos lados y en este momento, entonces la preocupación por eso es el motivo a la cual estamos dando a conocer de las afectaciones actuales que hay en este momento, si, parece que todo ha pasado, pero otra vez se mira ya gente extraña, armada, no se sabe si es ejército, si es guerrilla, si es mafia, son paramilitares, bueno de diferentes índoles que están afectando el territorio.*

#### **Imágenes No. 12** **Minas antipersona (MAP) en Resguardo Buenavista**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Estos dos hechos verificados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, de existencia de MAP en Buenavista y de AEI en Wisuya son parte de un proceso sistemático de minado del territorio en los últimos años vinculado a la disputa por el control del territorio para la producción y circulación de coca.

*En este momento tenemos identificado unos puntos, pero no podemos saber cuántas [MAP] hay y lo que nosotros podemos decir y luchar es que dentro del área constituida sí se puede desminar porque eso nos pertenece. El Resguardo ya es legalmente constituido y entonces hagan ese trabajo y quienes vamos hacer el trabajo acompañados con una organización de la sociedad civil.*

*Ya en el 2012, una abuela murió por haber pisado una de estas minas cuando se estaba dirigiendo a pescar a un pequeño río que quedaba cerca de su vivienda. Pisa una mina y fallece, y se han presentado otros incidentes donde miembros de la fuerza pública han muerto y donde sembradores o instaladores de minas han resultado en este caso lesionados*

*Hay como dos líneas de tiempo establecidas de minado entre el 2014 y 2015, son como los dos momentos, coincide con la entrada de Amerisur y tenemos una nueva situación de minado actual que se ha empezado a reportar como a partir de finales del 2017. Tiene que ver sobre todo con minas cerca de cristalizaderos de coca o de laboratorios, y por eso les decíamos que por ejemplo ahora, hace dos días recibimos la denuncia de un Taita de la comunidad de Puerto Silencio de nuevas minas cerca de la casa de pensamiento, que es un zona de tránsito muy frecuente por los actores porque muy cerca hay cristalizaderos. Sabemos que por esta zona es como el límite del resguardo, habrían minas nuevas sobre todo en la zona más norte, por información que tenemos de confrontaciones que se habían dado entre FARC y mafia y luego toda información que tenemos de esta zona de Puerto Silencio, y lo que sabemos de lo que menciona el Gobernador para la zona de ampliación y para el Mecaya<sup>48</sup> debe haber un fuerte ejercicio de minado por la presencia ya más estable de esta estructura que se autodenomina frente primero de las FARC.<sup>49</sup>*

La Delegación de la Defensoría del Pueblo confirmó en casi todos los testimonios el temor fundado que provoca a las personas y familias la incertidumbre respecto a la totalidad de lugares del territorio que pudieran estar minados. Temen que con el pasar de los días y meses, si se recrudece el enfrentamiento entre mafias, disidencias de las FARC y el ejército colombiano, se abran nuevas zonas de minado y nuevas vidas perdidas que lamentar.

Este hecho configura el confinamiento del territorio de Wisuya/Buenavista, tal como lo han advertido el PNUD en su informe de 2016 y que contribuye a demostrar la grave y urgente situación de riesgo a los derechos a la vida y a la integridad, tal como lo ha

---

<sup>48</sup> Zona al este del Resguardo Buenavista y del Parque Nacional La Playa.

<sup>49</sup> Sería un grupo que se distanció del inicio de las negociaciones en cuba para la firma de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Autodenominado frente primero se habría conformado desde el 2016. Información disponible en < <https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/disidencia-frente-primer/>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

reconocido la CIDH en las medidas cautelares emitidas en julio de 2018 respecto del Estado de Colombia.

Al respecto, el marco de protección elaborado por la *Convención sobre prohibiciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados* (en adelante la Convención sobre armas convencionales nocivas), ratificada por el Ecuador el 4 de mayo de 1982 y sus Protocolos II (sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, ratificado en la misma fecha) y V (sobre los restos explosivos de guerra, ratificado el 10 de marzo de 2009), establecen un marco comprensivo de obligaciones estatales frente a estos hechos.

El protocolo II en sus artículos 3 y 4 prohíbe emplear minas antipersona (MAP) como medio de ataque o de defensa contra la población civil o cuando haya razones para prever que causarán incidentalmente la muerte o herida a personas civiles y/o el daño a bienes civiles, así como usarlas en ciudades, pueblos, aldeas y otras zonas donde habiten civiles. Y el artículo 9 prevé procesos de cooperación internacional para retirar y desactivar (desminar) los territorios.

Por su parte el protocolo V determina como obligación realizar programas para la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra en los territorios afectados bajo su control, cuya prioridad debe destinarse a los lugares donde exista riesgo humanitario.

En esa medida, el gobierno ecuatoriano está obligado a informar públicamente si tiene información sobre zonas minadas en el territorio bajo su jurisdicción en la zona de Wisuya/Buenavista y sus alrededores, en cumplimiento del protocolo II de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos; así como la señalización y retiro de los tres artefactos que se encuentran muy cerca al centro poblado de San José de Wisuya por el riesgo humanitario que corren sus habitantes cuando transitan por esta zona.

Se debe agregar que el uso de minas anti persona o de abandonar artefactos explosivos improvisados en territorios indígenas pone en riesgo la vida digna de las personas que incluye las actividades culturales propias, tanto las materiales (cultivos, siembra y caza) como las inmateriales (espirituales), afectando de ese modo al conjunto de derechos colectivos referentes a mantener las prácticas culturales históricas de dichos pueblos y que se traducen en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.

## **6. Actividades extractivas sin consulta previa, libre e informada**

En este violento contexto de limitaciones a la circulación, hostigamientos, amenazas y ataques, de reclutamiento forzado y de uso de armas convencionales que por sus efectos nocivos o indiscriminados están prohibidas, que enfrentan las personas, familias y comunidades del territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista, la Defensoría del Pueblo de Ecuador también verificó información sobre las actividades

extractivas que se realizan en el territorio, tanto por la empresa transnacional Amerisur Resources PLC como por la empresa pública Petroamazonas EP.

La empresa AMERISUR RESOURCES PLC tiene origen británico y se dedica al ciclo completo de extracción y comercialización de petróleo y gas. Según su página web opera en Colombia y Paraguay. En Colombia, como se mencionó anteriormente, explota los bloques Platanillo (11.119 hectáreas), explora y realiza sísmica en los bloques Putumayo-9 y Putumayo-12, que coincide con la zona de ampliación territorial solicitada por el Resguardo Buenavista. Y también opera en los bloques Coati, Putumayo-8, Putumayo-30, CPO-5, Andaquies, Terecay, Tacacho y Mecaya.<sup>50</sup>

Se ha verificado también, a través de la información pública de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, que esta empresa constituyó una subsidiaria denominada Amerisurexplor Ecuador S.A. cuyo socio principal es AMERISUR RESOURCES PLC con 24.750 dólares de capital suscrito, asociada con el señor Juan Sebastián Loaiza Berrú propietario de 250 dólares de capital suscrito, quien aparece además como su administrador.<sup>51</sup> Fue la empresa Amerisurexplor Ecuador S.A. quien suscribió un convenio con Petroamazonas EP para construir el Oleducto Binacional Amerisur (OBA) que afectó al territorio San José de Wisuya.<sup>52</sup>

Al respecto, se precisa que, de manera previa a la misión de verificación realizada en julio de 2018, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en la resolución No. 003-DPE-DNDCNA-2018-MP de 24 de agosto de 2018, dentro de la Investigación Defensorial No. 283-2016-DPE-DNDCNA-2016, verificó la responsabilidad del Estado ecuatoriano y de las empresas citadas en sus operaciones realizadas en territorio ecuatoriano y que afectaron al territorio San José de Wisuya.

El principal impacto provocado por las operaciones de lingada<sup>53</sup> del OBA dentro de territorio de Wisuya tiene que ver con la tala y deforestación de una zona de árboles, entre ellos, de Yagé y Yoco vinculados a la casa del pensamiento de Taita Felinto Piaguaje y los daños a un ojo de agua y riachuelo que le servían para cocinar, hechos registrados en la investigación defensorial. Durante esta visita, según indicó un familiar, estos hechos han afectado a la salud del Taita, según relató en el testimonio que se cita a continuación.

*Pues lo que paso es que ellos entraron a la comunidad sin consultarnos, sin consultar con nadie de nosotros, sino con una señora de ahí, pero ni con ella también, porque entraron así no más, como nosotros nos dimos cuenta pero por otras personas que ya nos dijeron ahí fuimos a ver que habían dañado unos remedios que habían por ahí sembrado, esa fue la afectación más de él y de todos los de la comunidad, que eran*

<sup>50</sup> Disponible en: <<http://www.amerisurresources.com/operations-colombia-paraguay/colombia-projects>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>51</sup> Información recabada de la página de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

<sup>52</sup> En la página web de Amerisur Resources se puede ver la presentación sobre la construcción del OBA: <[http://www.amerisurresources.com/pdf/UpdateOBA%20Aug\\_Sept2015%20Spanish\\_V3.pdf](http://www.amerisurresources.com/pdf/UpdateOBA%20Aug_Sept2015%20Spanish_V3.pdf)>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

<sup>53</sup> Hace referencia al proceso de juntar y soldar los tubos en tierra para posterior ubicarlos en su posición original.

*remedios también del monte. Eso fue en diciembre del 2015. Él quiere ir a trabajar, pero nosotros salimos a buscarlo, porque el a veces se pierde, él era alegre contento con cualquiera conversaba, ahora no, si usted le pregunta le habla, sino no se queda callado, quedo como trastornado. Yo digo que al él le paso eso, porque tenía unos remedios, el yagé, que él tenía por ahí, eso era una reserva y nadie entra por ahí y ellos fueron, anduvieron por ahí, cortaron sin permiso, eso creo que fue la afectación que le dio.*

Frente a estos hechos, en dicha resolución, esta Defensoría resolvió lo siguiente:

*SEGUNDA: DETERMINAR que el Estado Ecuatoriano, a través del MINISTERIO DEL AMBIENTE y las empresas PETROAMAZONAS EP y AMERISUR, vulneraron los siguientes derechos colectivos de la comunidad San José de Wisuya:*

- a. Los derechos a la posesión ancestral del territorio, a la consulta previa libre e informada y a la identidad cultural de la Comunidad que implica: la falta de reconocimiento de los sistemas de gobernanza, organización social y ejercicio de autoridad; a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, así como la falta de protección de los lugares rituales y sagrados.*
- b. Así mismo estas acciones vulneraron los derechos de la naturaleza y del ambiente sano como resultado de las acciones ejecutadas en el territorio de la comunidad en el marco del Proyecto de Ampliación del Roda para la Evacuación de Crudo desde el Campo Platanillo ubicada en Colombia hasta la Estación VHR Bloque 58 ubicada en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador.*

*TERCERA: DETERMINAR que el Estado Ecuatoriano, a través del MINISTERIO DEL AMBIENTE y la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, omitieron su obligación de controlar y por tanto prevenir la vulneración de los derechos de la comunidad y de la naturaleza, al conocer los hechos previo a la intervención de la Defensoría del Pueblo, esto es antes de la autorización u otorgamiento de permisos, como durante su implementación en la supervisión y fiscalización; los cuales resultaron poco eficientes.*

*CUARTA: DETERMINAR que las empresas PETROAMAZONAS EP y AMERISUR (delegataria del Estado Colombiano) causaron daños culturales y ambientales en la comunidad y en el territorio Kichwa Siona de San José de Wisuya, al realizar operaciones de colocación de tubería para el transporte de crudo desde Colombia a Ecuador sin licencia ambiental, a partir del mes de Noviembre del año 2015, daños que todavía persisten.*

A estos hechos ocurridos por la actividad transnacional de esta empresa en asocio con Petroamazonas EP, se suman varias denuncias de operaciones sin consulta previa ni autorización de las autoridades de Buenavista que Amerisur Resources PLC también realiza en ese territorio, bajo jurisdicción del Estado colombiano, tal como se relata a continuación.

*[Al] Inicio de [la] actividad petrolera en el territorio, para ese momento la empresa Amerisur tenía intenciones de hacer exploración sísmica en el área constituida y en el área de ampliación y tras culminar el proceso de consulta previa se cierra sin acuerdo,*



*se protocolariza sin acuerdo con la comunidad. Sin embargo, para marzo del 2015, la empresa Amerisur valiéndose de engaño y de presión toma contacto nuevamente con los dirigentes y les indica que tiene una autorización del Ministerio del Interior concretamente de la Dirección de Consulta Previa concretamente para iniciar la actividad sísmica y que van a iniciarla por las buenas o por las malas, es decir, que se haría uso de la fuerza pública para acceso al territorio. Eso hace que en ese momento los dirigentes firmen un acuerdo con la empresa petrolera para facilitar su ingreso.*

*Ese acuerdo evidentemente estuvo en ausencia de garantes, no estaba ni Defensoría ni Procuraduría y se hizo, insisto mediante presión y engaño. Con ese acuerdo firmado la comunidad en el mes de junio viaja a Bogotá, nuevamente en junio del 2015 y Consulta Previa le indica que lo que le ha dicho Amerisur y se lo ha dado por escrito es un documento en el que consta que no hay acuerdos protocolarizados y que en esa medida Amerisur debe dar continuidad a los procedimientos administrativos que corresponden. A partir de ese momento, la comunidad le envía un comunicado a Amerisur indicándole que el acuerdo al que se ha llegado en meses anteriores no tiene ninguna validez por haber sido efectuado mediante presión y bajo engaño. La empresa sigue presionando a la comunidad.*

*En el 2016, se decide la Primera minga de pensamiento y resistencia del pueblo Siona. Se realiza esa primera minga, asisten alrededor de 14 instituciones y en esa primera minga se realizan varios acuerdos, el primero de ellos se ratifica el tema de que la comunidad no da consentimiento a la petrolera. Hemos tenido suficientes discusiones jurídicas sobre el tema de veto o no veto en Colombia y sobre la interpretación del consentimiento y en efecto lo que hemos logrado demostrar tal como lo ha dicho la corte constitucional es que en el caso del resguardo Buena Vista se cumplen 3 elementos, 1. Riesgo cultural, 2. Vertimiento químico, riesgo de vertimiento químico sobre el territorio, y 3. Riesgos de desplazamiento y que esos tres criterios son suficientes para que la comunidad pueda argumentar su consentimiento o no consentimiento sobre la actividad petrolera.*

*Y para cerrar, en ese mismo marco, en estas 2 o 3 semanas anteriores la guardia en su actividad su recorrido territorial se ha dado cuenta que la empresa Amerisur ha empezado nuevamente actividades sísmica, esa actividad sísmica está afectando especialmente o pensábamos mejor dicho que estaba afectando especialmente área no formalizada, es decir, territorio de ampliación. La comunidad, el gobernador de hecho se reúne con algunos presidentes de comunidades campesinas que colindan con el resguardo que en efecto indican haber firmado acuerdos con la empresa para permitir que se haga sísmica dentro de sus veredas dentro de sus comunidades, sin embargo, la georeferenciación nos indica que las sísmica se está haciendo dentro de territorio y no solo dentro del territorio de ampliación sino que está dentro del territorio formalizado.*

Respecto de la actividad extractiva, la Resolución Defensorial emitida el 24 de agosto establece el estándar más progresista en Ecuador respecto de la consulta previa, libre e informada, conformado por el artículo 57 numeral 7 de la Constitución en concordancia con la Sentencia de Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad condicionada de la Ley de Minería así como la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs. Ecuador, al amparo del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del que se deriva que los procesos de socialización como parte de

la obtención de la licencia ambiental no constituyen consulta previa, libre e informada y que, en el caso de San José de Wisuya, las obras de lingada no contaron con licencia ambiental ni incluyeron a esta comunidad como parte de las zonas directamente afectadas.

En esa medida, la propia resolución insta al Estado Ecuatoriano a que repare integralmente a las comunidades en el siguiente sentido:

*QUINTA: INSTAR al Estado Ecuatoriano, a través de las instituciones MINISTERIO DEL AMBIENTE, PETROAMAZONAS EP, AGENCIA DE REGULACIÓN HIDROCARBURÍFERA y SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, a que se disponga la reparación integral por los daños materiales e inmateriales provocados a los habitantes, y al territorio colectivo de la comunidad San José de Wisuya, así como de la Naturaleza mediante el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada y considerando la opinión de la comunidad para su reparación integral, no solo en reforestación y recuperación del ojo de agua, sino tomando en particular consideración los sitios sagrados. Reparación integral que debe incluir las disculpas públicas.*

*SEXTA: INSTAR al Estado Ecuatoriano, en especial, al MINISTERIO DEL AMBIENTE, PETROAMAZONAS EP, AGENCIA DE REGULACIÓN HIDROCARBURÍFERA y SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, así como a cualquier empresa delegataria o concesionaria a respetar el derecho a la posesión ancestral de los territorios de la Comunidad San José de Wisuya, ubicada en la parroquia Santa Elena, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, el cual se hace efectivo al abstenerse de ingresar a él sin su consentimiento.*

Adicionalmente es necesario investigar el modo en que el capital transnacional de Amerisur Resources PLC opera actualmente tanto en Colombia y Ecuador al amparo de los estándares de derechos humanos y empresas que se construyen actualmente.

Relevante es mencionar que, mientras se escribía este informe de verificación, el 28 de octubre de 2018, el Taita Felinto Piaguaje falleció sin que a ese momento se haya producido por parte del Estado ecuatoriano reparación por los hechos cometidos por Petroamazonas EP y Amerisur y que afectaron gravemente su salud por la destrucción de los sitios ceremoniales para la práctica de medicina ancestral, derecho colectivo de la nacionalidad Siona.<sup>54</sup>

De todos modos se verifica que, adicionalmente a los impactos que se derivan de la disputa territorial entre grupos armados en el territorio Wisuya/Buenavista, sus habitantes además enfrentan a empresas extractivas transnacionales y estatales con intereses en el petróleo existente en la zona que contribuye a aumentar la amenaza a derechos colectivos, en este caso el derecho a la consulta previa, libre e informada y los posibles riesgos de contaminación.

---

<sup>54</sup> En la página web de la Defensoría del Pueblo de Ecuador consta el pronunciamiento público sobre la muerte de Taita Felinto: <<http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-de-ecuador-ante-fallecimiento-de-luis-felinto-piaguaje-yaiguaje-taita-siona-de-la-comunidad-san-jose-de-wisuya/>>. Ingreso: 30 de noviembre de 2018.

## **7. Carencias en derechos individuales, económicos y sociales**

Durante la observación participante y a partir de las conversaciones y entrevistas mantenidas con la comunidad, se constata en el territorio varias omisiones de los dos Estados para garantizar algunos derechos individuales así como otros económicos, sociales y culturales. Sin embargo se precisa que Colombia presenta la mayor deficiencia en este sentido.

Respecto de los servicios básicos, en Buenavista, del lado colombiano, no existe luz eléctrica mientras que en Ecuador sí hay, pero es intermitente y el arreglo puede demorar días o semanas. Al momento de la visita tampoco había luz eléctrica en el lado ecuatoriano. Algunas familias usan pequeñas plantas eléctricas para sus hogares.

Así mismo sólo la comunidad de Wisuya tiene acceso por camino transitable para vehículos a motor mientras que a Buenavista sólo se puede acceder por río o caminando. En cuanto al derecho a la comunicación, el acceso a telefonía es casi inexistente, hay determinados puntos en el territorio donde se recibe señal de teléfono celular, sin embargo, constituyen puntos de conflicto entre grupos armados irregulares y ejércitos por su control.

*Lo que nos denuncia la Mayor [una Mama a quien no se le pudo entrevistar] es que vive cerca de un punto donde se coge señal de celular. Los dos grupos tanto FARC como Mafia utilizan ese punto para sus comunicaciones. Esa casa de la abuela ya ha sido víctima en épocas anteriores de bombardeos sobre su domicilio por la misma razón, y ya en años anteriores LAS FARC y el ejército minaron una área en Puerto Silencio, donde también había una buena recepción de señal celular, impidiendo a la comunidad el único punto de comunicación y nos preocupa que aquí vaya a ocurrir lo mismo, además porque están usando la zona como un punto de ingreso y eso significa que están patrullando por el medio del territorio formalizado, los dos grupos.*

En cuanto a la salud, la totalidad de entrevistados confirmaron que si bien existen puestos de salud cercanos, en el caso de Ecuador la cobertura es poca, sólo tienen medicamentos para el dolor y, cada cierto tiempo, ofrecen brigadas para vacunas. Mientras que en Colombia los Puestos Obligatorios de Salud (POS) no funcionan.

*Cuando nos toca, pues nos toca salir porque hay un puesto de salud pero no funciona con todas las comodidades como tiene que ser como tiene que ser. Viene una brigada y si están muy enfermos dice no, hay que remitirlos porque aquí no hay, tómese un acetaminofén y esas cositas porque, allá en Colombia se llama el POS, no sirve.*

Por su parte, las mujeres, durante un grupo focal espontáneo mientras preparaban la comida, identificaron que uno de los problemas recurrentes a la salud está vinculado al agua contaminada: “entonces hemos visto que el tema del agua es el problema, el agua

contaminada de la quebrada, esto ha ocasionado problemas en la salud, no tienen un centro médico, no tienen ni lugar, ni médico ni medicina...”

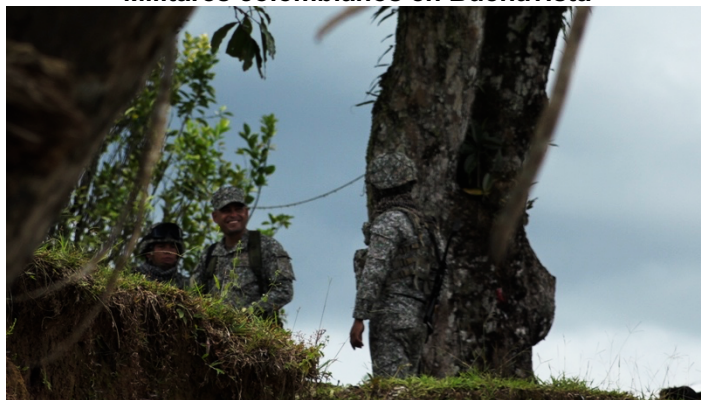
En cuanto a la educación, si bien existe la escuela en el territorio bajo jurisdicción del Estado ecuatoriano, el principal inconveniente que enfrentan es la ausencia de procesos educativos interculturales que reconozcan, valoren e incorporen la cultura Siona.

*En la parte educativa lo mismo, porque siempre de todas las cosas que vienen, siempre es impuesto, la cartilla que mandan desde allá no se reconoce como se tiene que trabajar acá en la población, no se reconoce al taita, a la abuela que quieren entrar a enseñar cómo se teje la chambira, como se hace un cedazo, cómo se hace un canasto, una mochila. Nunca, tiene que ser contratadas, tienen que ser bachiller, de todo, eso ha hecho que la educación entonces que todos los niños vayan mirando otra cosa.*

*No digo que sea malo, no. Hay que ponerles internet, hay que ponerle computador para que miren todo lo que pasa, pero si contratamos unos abuelos dicen no, no hay recurso. Pero entonces las instituciones que saben de cuadrar el internet, de cuadrar todo y nosotros nunca estamos en desacuerdo, yo sé que necesitamos también. Pero cuando queremos contratar una abuela para que cuente la historia, un mayor para que sea, más que los psicólogos que nunca han mandado, que sea un ejemplar para espiritualmente corregirnos y mirar a los niños, no se puede porque no está dentro de la normativa, nos hemos quedado en eso y creo que nos seguiremos quedando en esas situaciones y el esfuerzo de nosotros porque es lo propio, pero nunca los Estados han reconocido, nunca.*

Es evidente que las condiciones precarias en las que viven las familias Siona en Buenavista y Wisuya agravan aún más la situación descrita en este informe. Durante todo el recorrido realizado se pudo evidenciar la ausencia del Estado en ambos lados de la frontera, con excepción de la presencia visible de los dos ejércitos cada cierto tiempo y en distintos lugares. Por ejemplo, previo al ingreso a la comunidad de Wisuya hay un retén militar o así mismo durante los días de verificación, cada cierto tiempo un bote militar de alguno de los ejércitos recorría el Río Putumayo.

**Imagen No. 13**  
**Militares colombianos en Buenavista**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Ahora bien, es importante observar que, dado que la población del territorio binacional indígena de Wisuya/Buenavista tiene relaciones sociales en ambos lados de los territorios de los Estados de Ecuador y de Colombia, es relevante informar que el derecho a la identidad debe ser garantizado y entendido en este contexto. El reconocimiento jurídico de cada ser humano, en su dimensión individual es necesario para asegurar la pertenencia de cada uno de ellos a la cultura de la que participan y el territorio en el que habitan.

En esa medida, los habitantes del territorio binacional indígena ejercen su derecho a la libertad de tránsito a lo largo de su territorio y eso implica el cruce constante de la frontera para la práctica de sus relaciones sociales. Hay familias binacionales, niños y niñas que nacen a ambos lados de la frontera en el territorio colectivo binacional. Así mismo, y por los hechos contenidos en este informe también suceden, en ocasiones, desplazamientos forzados dentro del territorio pero que implican cruce de frontera estatal.

Al respecto la Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la identidad cultural en el artículo 21 que tiene expresa relación con el artículo 45 que reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a su identidad, nombre y ciudadanía, y que en el caso de este territorio binacional indígena debe ser leído expresamente a la luz del artículo 57 numeral 1 de la Constitución cuando garantiza mantener, desarrollar y fortalecer libremente la identidad.

Al respecto, el artículo 36 del Convenio 169 de la OIT es expreso en reconocer, y así lo hemos reiterado en el informe, que los pueblos indígenas, en especial aquellos divididos por fronteras estatales, tienen derecho a mantener contactos, relaciones y cooperación, incluidas las sociales.

En esa medida es necesario que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación garantice procesos accesibles, gratuitos, celeres y eficaces para garantizar la identidad ecuatoriana de quienes forman parte del territorio binacional indígena, comprendiendo la dinámica territorio que tienen y las dificultades para acceder a los servicios de esta Institución.

## **8. La identidad y la cultura Siona en riesgo**

En el acápite de este informe relativo a la falta de reconocimiento del territorio indígena binacional por parte de los Estados de Ecuador y Colombia, se mencionó ya que el derecho colectivo al territorio está vinculado no sólo a su aspecto físico y delimitable sino también a los aspectos inmateriales existentes en distintas cosmovisiones. La sentencia de la Corte IDH en el caso Sarayaku vs. Ecuador expresamente recuerda que “desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a



sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas”.<sup>55</sup>

Bajo esa lógica, en los testimonios recogidos durante esta misión de verificación son varios los impactos provocados a los derechos colectivos culturales de los habitantes de Wisuya/Buenavista derivados de todas las amenazas e inminente riesgo que enfrentan tanto por las acciones de grupos armados como por el de las empresas extractivas.

Uno de los relatos más significativos es el ejercicio de la memoria respecto de los ancestros heredada a través de los Taitas y Mamas de la comunidad que han mantenido la cultura, como dicen ellos, el ser Siona y seguir manteniendo aún la medicina ancestral, durante todos estos años de colonización. Este ejercicio de memoria cultural está actualmente vinculado al ejercicio colectivo de defensa del territorio. Uno de los habitantes de Wisuya relató lo siguiente:

*Bueno sí, digamos en primer lugar dando el contexto espiritual en este momento, digamos hemos sido muy afectados, en primer lugar miremos desde el conocimiento ancestral [que] milenariamente [...] ha existido. En el territorio quitaron esto y nos cocieron vestido, nos pusieron vestidos y ahí viene ya perdiendo la lengua de nosotros los Sionas, y ahí viene que habemos (sic) poquitos los que hablamos los que ya quedó así. Los niños ahora, los jóvenes ya no hablan, ya no ponen el vestido ya ponen pantalones, todos nos ponemos pantalones ahora...*

*Entonces digamos el contexto social, esto es una de las grandes negligencias y todo lo que pasó porque hubo una gran fortaleza. Y es que a pesar de que les impusieron todo eso se llevaron a su mente algo tan valioso y muy espiritual que es guardarse el tesoro más grande que es ser Siona. Y a pesar de que les quiten la ropa a pesar de que les peguen, siempre se mantuvo esa conexión entre ellos espiritualmente.*

*Y el pueblo Siona y a pesar de todas esas situaciones digamos pudo avanzar y hoy los abuelos están repartiendo su medicina tradicional. Que nos están diciendo a través de la medicina, nosotros luchamos. Ahora ustedes son los que tienen que empoderarse de todo ese proceso de resistencia que hemos hecho. Por eso entonces nace digamos desde nosotros, por un mandato milenario, a recuperar y hacernos frente y hacer valer la vida del pueblo Siona frente a todos los impactos que nos ha traído...*

Así, se puede reconstruir, a partir de diversos testimonios recabados durante la verificación, parte de la cultura Siona que es amenazada por los hechos que se han verificado en el presente informe. Es decir, se presentan prácticas culturales vinculadas al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales en contraste con algunas de las amenazas que enfrentan en este momento.

Una de ellas son las prácticas alimentarias y de subsistencia de casi la totalidad de los habitantes en riesgo por el toque de queda impuesto y las múltiples amenazas en el territorio.

---

<sup>55</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 145.

*...la comunidad de nosotros es esa: el pescado, la cacería, ir por allá a matar los animalitos, comerlos. Pero hoy en día no podemos eso. Nosotros no tenemos plata para madrugar a comprar carne a comprar huevos, entonces eso es preocupante para nosotros los indígenas.*

*Vivimos también de la agricultura, plátano, café, maíz, cacao, arroz, pero eso no más es para el consumo familiar, para vender no vale nada, además que no hay vías, si lleva un racimo de plátano alguna parte quiere que le regalen, más cuesta el pasaje que la llevada, lléveselo a su casa mejor*

*Ya en el 2012, una abuela murió por haber pisado una de estas minas cuando se estaba dirigiendo a pescar a un pequeño río que quedaba cerca de su vivienda. Pisa una mina y fallece...*

Adicionalmente, en el territorio sus prácticas de medicina ancestral vinculada a la salud también corren riesgo frente a la situación compleja que se ha descrito en este informe. En los siguientes testimonios se evidencia el significado profundo que tiene la medicina ancestral y las dificultades para poder ejercer estas prácticas en contraste a una presencia limitada de la política de salud del gobierno central.

*...en este momento, digamos aquí en esta comunidad de San José de Wisuya no contamos con nada, medio vienen a ponernos una vacuna de la fiebre amarilla, cualquier cosa nos ponen y ya. Aquí lo que nos sostiene es la medicina tradicional, porque es nuestra, entonces cuando estamos enfermos vamos donde los abuelos para curarnos para sanarnos a través de nuestras plantas sagradas que nos curan, que nos muestra que nos protege que nos visiona, el futuro del presente. Y nos visiona también a mirar cual ha sido el ancestro de nosotros, de dónde venimos y para donde vamos...*

*Cuando nos toca pues nos toca salir porque hay un puesto de salud pero no funciona con todas las comodidades como tiene que ser. Viene una brigada y si están muy enfermos dice no, hay que remitirlos porque aquí no hay, tómese un acetaminofén y esas cositas, no sirve, pero gracias a Dios aquí contamos con nuestra medicina tradicional y eso nunca lo reconocen, nuestros abuelos, nuestros mayores, cómo se cura el alma, el cuerpo y el espíritu, nunca ha sido reconocido.*

*Han venido brigadas de la cruz roja de vez en cuando, las vacunas para los niños, recién nacidos, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses y 18 meses, a los 24 meses y a los 5 años, a los niños 9 años y 15 años, niño que nace que tenga las vacunas completas, porque antes un niño se murió con la varicela, ahora casi ya no hay eso.*

Sobre este punto, en el tiempo de juegos que se hizo con niñas y niños de la comunidad de Wisuya, el primer día de la verificación, ellos empezaron a contar qué cosas les gustaba y qué otras no. Al profundizar sobre esto, un relato insistente de ellos fue que no les gustaba “entrar al monte porque ahí la gente se enferma”, varios de ellos coincidieron que no les gustaba estar enfermos o ver a otros niños que se enferman.

Es pertinente agregar que en Wisuya, una de las afectaciones más graves de los impactos que provocaron Amerisur Resources PLC y Petroamazonas EP fue precisamente la destrucción de una casa del pensamiento y la obstrucción de un ojo

de agua, que afectó gravemente a la salud integral del Taita Felinto. Estos hechos han sido verificados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en la resolución No. 003-DPE-DNDCNA-2018-MP, de 24 de agosto de 2018, sin embargo se precisa aquí por estar relacionado con los impactos de las actividades extractivas en el territorio.

*Él quiere ir a trabajar, pero nosotros salimos a buscarlo, porque el a veces se pierde, él era alegre contento con cualquiera conversaba, ahora no, si usted le pregunta le habla, sino no se queda callado, quedo como trastornado Yo digo que al él le paso eso, porque tenía unos remedios el yagé, que él tenía por ahí, eso era una reserva y nadie entra por ahí y ellos fueron, anduvieron por ahí, cortaron sin permiso, eso creo que fue la afectación que le dio.*

Estos relatos respecto a prácticas culturales que, por una parte, no son reconocidas y, por otra parte, limitadas y amenazadas por las actuales condiciones, en su conjunto plantean un riesgo para la existencia de la cultura Siona, adicional a las amenazas a la vida y la integridad de los habitantes de Wisuya/Buenavista. En varios testimonios se hizo referencia al riesgo de un exterminio cultural. Se cita uno de los testimonios más significativos.

*Y la decisión y el mandato de los abuelos es que siempre el eslogan como la vida nuestra es que nosotros el pueblo Siona, vamos a morir pero hablando, vivir para vivir bien, para vivir en nuestro contexto social, histórico, político, cultural. Y si nos toca morir nos morimos también diciéndole al pueblo, esto hay que luchar. Y esos es lo que yo tengo en mi cuerpo, en mi alma y en mi corazón, luchar por el territorio. Para que de aquí a mañana los niños sepan de cuál es la pervivencia que tenemos nosotros como pueblo Siona.*

*Y dentro de esa cosmovisión social y milenaria, los Sionas nos denominamos en ocho pilares: educación, territorio, gente, medicina ancestral, autonomía, control, subsistencia, salud y que para pervivir nosotros, tenemos que argumentarnos de esos ocho pilares en nuestro territorio.*

El conjunto de hechos relatados en el presente informe, como se mencionó al inicio de esta sección, amenaza y pone en riesgo el ejercicio de varios derechos culturales reconocidos en el artículo 57 numeral 7 de la Constitución del Ecuador, pero que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales:

1. *Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.*
8. *Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.*
10. *Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.*
12. *Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares*

*rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.*

14. *Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.*

Es evidente que las actuales condiciones en que habitan las personas, familias y comunidades de Wisuya/Buenavista no se restringen sólo a amenazas la vida y la integridad (posible exterminio físico), hechos suficientemente graves y urgentes sobre los que el Estado ecuatoriano debe intervenir, sino también respecto del riesgo inminente de exterminio cultural de la cultura Siona en la zona por las presiones con las que lidian.

Se debe recordar que cerca al territorio de Buenavista, como resultado de la actividad cauchera en un inicio, y la expansión de la frontera occidental propiciada por la explotación petrolera, dos grupos indígenas, los Tetetes y los Sansahuari fueron exterminados, precisamente por el confinamiento del territorio y la presión a la que fueron sometidos por las compañías petroleras, entre ellas Texaco y la Corporación Ecuatoriana de Petróleos (CEPE), actualmente Petroecuador.

#### **IV**

### **Autodeterminación, defensores de derechos humanos y protección del territorio**

Ahora bien, frente al confinamiento del territorio indígena binacional de Wisuya/Buenavista y las amenazas que enfrentan las personas, familias y comunidades, la organización social existente se ha reconfigurado, no sólo a partir de sus propios procesos internos, sino sobre todo para dar una respuesta a la actual situación, para seguir viviendo en el territorio pacíficamente, seguir siendo Siona, como relatan.

Este territorio colectivo, en ejercicio de los derechos a la autodeterminación, el autogobierno y el mantener sus propias instituciones, reconocidos en la Constitución (artículo 57 numerales 9, 10, 15 y 16), el Convenio 169 de la OIT (artículo 8) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 4 y 5), cuenta con una estructura socio-organizativa conformada por: 1) el consejo de Sabios, es decir las mayores y los mayores que cuentan con el respeto de la comunidad y siguen su sabiduría y conocimiento ancestral para la toma de decisiones, y; 2) a ellos se suman el consejo de gobierno, uno en Buenavista a cargo de un Gobernador y otro en Wisuya, a cargo de un Presidente, ambos parte de sus respectivas directivas que constituyen la máxima autoridad y de relacionamiento con otros actores.

Sin embargo, estas dos formas de organización social históricas se han fortalecido con la consolidación de la Guardia Indígena Siona. La guardia indígena, al igual que en el resto del territorio colombiano, surge como la respuesta y resistencia a los efectos del conflicto

armado. Constituyen grupo pacífico y no armado, encargado de monitorear y proteger el territorio y sus habitantes frente a las difíciles situaciones que enfrentan en estos últimos años así como de promover y continuar manteniendo viva la cultura Siona a través de las generaciones. Las actividades de la Guardia Indígena son amplias y diversas e incluyen el monitoreo, alerta temprana, protección física, comunicación, mapeo y registro, formación y preparación, vocería, acciones de defensa, de relaciones y negociaciones con actores externos.

Ahora bien, la conformación de la guardia está vinculada a dos procesos históricos: el primero que tiene que ver con el fortalecimiento de la recuperación de la memoria Siona y Kichwa en la zona a través de la espiritualidad, el conocimiento del territorio y de quienes lo habitan. Y el segundo relativo al deseo de producir un territorio social pacífico y neutral en medio del conflicto y los intentos de ampliar las fronteras extractivas y de actividades ilícitas en la zona.

**Imagen No. 14**  
**La Guardia Indígena del territorio binacional Buenavista/Wisuya**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Los testimonios que se presentan a continuación fueron recogidos en conversaciones espontáneas durante el recorrido mientras nos acompañaban y protegían, así como durante un grupo focal después de la ceremonia del Yoco y antes de iniciar el segundo día de verificación. Así se presenta la Guardia Indígena del territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista:

*Primeramente buenos días, hemos sido guardianes ancestrales de nuestros territorios, Cuiracuas, cuidadores, nosotros hemos sido guardianes, milenariamente y ancestralmente hemos sido guardias de nuestro territorio, de acuerdo como va cambiando el tiempo, todo lo que va sucediendo en el país, cuando ya se normalice todo lo que tiene que ver con la diplomacia, las limitaciones, también nos lleva a nosotros a dejar de ser guardias espirituales en el sentido como nuestros mayores protegían el territorio y cada uno desde el más pequeñito al más anciano también tenemos que organizarnos y hacernos visible en los mecanismos de dar a entender que hay unos Cuiracuas presentes y activos.*

*Nosotros en este momento comenzamos un procesos desde el 2008, en el tiempo que fue gobernador el dirigente de cultura, que es desde allí que comienza un proceso de formación de unos jóvenes pero que en cuanto al tiempo también en algún momento*



*bajo. En este momento por todas las instancias que ha venido sucediendo, nos toca formarnos en este proceso ya como tal, en dos años y medio, hacernos visibles.*

*Pero tenemos que entender primeramente de la ancestralidad, desde nuestra ley de origen desde nuestra espiritualidad hemos sido guardianes por mucho tiempo desde nuestra existencia, desde allí comienza nuestra lucha presente en el territorio que también nuestra lucha no va solamente a la protección del territorio indígena, también hacernos visibles y en las exigencias ante el Estado por los diferentes incumplimientos que tienen que atender a nuestros territorios, a nuestra gente, en nuestro espacio, entonces ahí estamos encaminados en esa parte y de que ser guardias, cuidadores, pues no es un camino fácil también hemos encaminado este gran trabajo principalmente, nuestra primera formación está en la parte espiritual con nuestros mayores, de allí nace todo una línea de resistencia y de claridad para poder encaminar este gran trabajo y que estamos conformados en esta parte pero que también necesitamos tener conocimientos de afuera.*

*Estamos conformados también, como físicamente, nos podemos preparar una estrategia, nos podemos preparar en diferentes ámbitos o áreas de comunicación, de monitoreo ambiental, derecho territorial, que nuestra guardia digamos estamos listos para proteger el territorio, para exigir sino que para también tener conocimiento de afuera y tener unas herramientas propias ya, de que podamos depender de nosotros mismos de nuevos conocimientos para esto han venido aportando, colaborando para adquirir esos conocimientos y que desde allí nace una mirada milenaria, un legado de nuestros abuelos porque en todo estos años tiene que estar en salir nuevas autoridades, gobernadores, tatitas, nuevos defensores de derechos, en los diferentes espacios, entonces nuestras miradas están en muchas partes, que es la fortaleza.*

*Aquí el legado es que tengamos la fortaleza aquí mismo, pero un poco más dependiente porque si no adquirimos conocimientos lamentablemente sucede cosas pero solamente tenemos que tender la red, entonces tenemos nuevas formas, estamos conformados primeramente espiritualmente desde las base, segundo tenemos también una formación militar y tercero estamos adquiriendo ese concomimiento externo que es bastante valioso a través de usarlo a nuestra manera, a nuestro sentir de poder sobrevivir en el territorio, entonces es como el tiempo que llevamos de la conformación de la guardia milenariamente pero nos llegó toda la situación a ponernos visible desde el 2008 en el proceso y ya como lamentado este proceso en dos años y medio caminar de lucha y resistencia por la supervivencia del pueblo Siona porque queremos seguir siendo Sionas.*

Ahora bien, el proceso de fortalecimiento de la Guardia Indígena en el contexto de hostigamientos, amenazas y ataques que enfrenta, va de la mano con la formación integral en varios aspectos de la vida cotidiana a fin de contar con herramientas diversas que permitan mejorar la protección del territorio.

*De antemano todos llegamos como haciendo, uno de los exámenes para ser un cuidador de nuestros territorios es participar de recorridos al territorio, ir a conocer el territorio, desde la parte espiritual pero también hay que caminarlo, eso ya es un cuidador porque ya capta lo que hay en el territorio, cuando ya se ha caminado en el territorio, ya se sabe que es el territorio, que hay allá en el territorio bajo la visión y también ya como bien se dice en los hechos.*

*Pero la guardia se presenta también como un espacio, es que se abren varios espacios, el guardia no solo va ir, el cuidador a recorrer y estar allá sino que está en varias capacitaciones, de estos guardias salen profesores, dirigentes, de esta guardia también salen médicos tradicionales, de esta guardia también hay jóvenes que están como defensores de derechos humanos por nuestro territorio, no quiere decir que todo el tiempo ellos tienen que estar en el monte o recorriéndolo sino que se abre muchos espacios, salen expertos también en fotografía y todos los espacios se abren en este contexto social, a ellos se les abre los espacios puntualmente y esto ha sido milenariamente algo que nos ha identificado a nosotros porque no todos vamos por el mismo carril pero también cada cual se acomoda de acuerdo a su potencialidad, aquí hay muchos jóvenes artesanos, hay mayores que saben, ya adultos que saben manejar el yoco, otros que son muy expertos en andar en la selva.*

Y así mismo significa una formación espiritual, que tiene que ver con el mantenimiento del espíritu para poder realizar las actividades que se les encarga.

*Aquí tenemos de todo en este momento y esto como lo que se define a la guardia y que este proceso se nos ha dado milenariamente como el cuidador que esta en este proceso, en este sentir, en el alma, en el corazón y en el espíritu, lo que es el territorio porque estamos luchando por la defensa del territorio, porque estamos aquí, es una gran responsabilidad y tiene que pasar muchas pruebas, la primera es tener que tomar yoco con el riesgo de que hay que tomar yagé para revolcarse un ratico, pararse más firme pero bueno, allí están, para sentirlo desde la parte espiritual, luego de un ratico y también sentir lo que es el terreno, ustedes ya tomaron yoco, ¿cómo se siente? Y que es la potente, nosotros vamos recorriendo o estamos recorriendo el territorio y allá se encuentra la mata de yoco, así sea medio día a raspar y vamos, y no da hambre, no da cansancio, anda despierto, eso es como un poco, tocando más a los cuidadores.*

**Imagen No. 15**  
**Guardia Indígena**



**Fuente:** Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2018

Esta relación entre la memoria, lo espiritual, la preparación y formación para la protección del territorio colectivo configuran en la Guardia Indígena el ejercicio cotidiano de los derechos a la autodeterminación, al mantenimiento y libre fortalecimiento de la identidad, a la conservación y desarrollo de sus propias formas de organización social, del ejercicio de la autoridad y sus formas de representarse, todos ellos vinculados estrechamente al ejercicio de sus prácticas tradicionales de espiritualidad y de control del territorio.

Al respecto, el preámbulo del Convenio 169 de la OIT reconoce “las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida” así como el derecho a que “un pueblo indígena conserve sus propias instituciones sociales.” Del preámbulo deriva la responsabilidad estatal constante en el artículo 2, numeral 2, literal b), del Convenio “de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto a su integridad, incluyendo medidas que promuevan la plena efectividad de sus instituciones.”

Por su parte la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce, en los artículos 3, 4 y 5, los derechos a “la libre determinación, por el cual determinan libremente su condición política”, el “derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” y el “derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones”, todos ellos vinculados al derecho reconocido en el artículo 26 numeral 2 de la misma Declaración que reconoce el derecho controlar las tierras, territorios y recursos que poseen.

Además, todos estos derechos se hallan sintetizados en el artículo 57 de la Constitución, especialmente en numerales 1, 9, 10, 11, 15 y 20, que permiten a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas organizarse con el fin de controlar y proteger el territorio y de esa manera las prácticas económicas, sociales y culturales que desarrollan.

Así, el reconocimiento y respeto del derecho al territorio, al que están obligados los Estados ecuatoriano y colombiano, por lo dispuesto en el art. 13 del Convenio No. 169 de la OIT, incluye el respeto a la importancia especial que para las culturas y valores espirituales del pueblo Siona reviste su relación con su territorio, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. De este reconocimiento, se deriva el derecho a la conservación y fortalecimiento de su sistema ancestral de “Cuidadores del Territorio”, guardia indígena territorial, con la finalidad de preservar la integridad e intangibilidad del territorio, a efectos de garantizar su transmisión a las nuevas generaciones.

Al respecto, la jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano también argumenta a favor del derecho a contar con sistemas propios de protección del territorio independientemente de los mecanismos acordados que puedan contar con las entidades del Estado ecuatoriano o colombiano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en la sentencia del caso Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, de 28 de noviembre de 2007, ha establecido que: “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo de interferencia externa, ya que el control territorial por los pueblos indígenas es una condición necesaria para la preservación de su cultura.” Además, ordenó al gobierno de Surinam que respetara y garantizara el derecho del pueblo Saramaka a: “administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal (...).”

Esa Corte ha reiterado en el mismo caso, a través de la Interpretación de la Sentencia realizada el 12 de agosto de 2008 que “el derecho de los pueblos indígenas a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistemas de propiedad comunal, forma parte del derecho a la propiedad amparado bajo el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.”

Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana, en Sentencia T-513/12, 6 de julio de 2012, reconoce: “la especial relación de las comunidades indígenas con el territorio en que habitan, de la que ha surgido la necesidad de garantía del mismo, así como de la organización y la posibilidad de que su vida al interior de dicho territorio se rija por normas propias y se dirija por autoridades tradicionales.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también se ha pronunciado sobre este tema, en su Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, de 1999, ha señalado que: “los pueblos indígenas (...) tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que procuren mantener o tomar el control de esos territorios mediante violencia o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.”

Este amplio estándar internacional de derechos humanos, desde la perspectiva del Estado ecuatoriano significa la obligación de reconocer y promover sus formas de organización y de expresión en cumplimiento del numeral 15 del artículo 57 de la Constitución vinculado al último inciso de ese mismo artículo que expresamente dispone que el Estado “garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna”. Es consecuencia el Estado está obligado a reconocer, respetar y apoyar al fortalecimiento de la Guardia Indígena del territorio Wisuya/Buenavista, y de todos los territorios y comunidades indígenas donde existan procesos similares en garantía del conjunto de sus derechos colectivos.

Adicionalmente, esta actividad colectiva de la Guardia Indígena integrante de la organización social del territorio colectivo indígena binacional de Wisuya/Buenavista los constituye como defensoras y defensores de derechos humanos individuales y colectivos cuyo objetivo es cuidar y defender el territorio y la vida digna frente a los hechos graves que se han verificado en el presente informe, tal como lo reconoce el artículo 1 de la *Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos*. Además ejercen varios de los derechos reconocidos a las y los defensores de derechos humanos.<sup>56</sup>

Resta decir que las actividades que realizan la Guardia Indígena en Ecuador también significa el ejercicio del derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución) frente a las acciones y omisiones del Estado que amenazan y vulneran los derechos humanos tal como se ha verificado en este informe.

---

<sup>56</sup> Al respecto observar los artículos 5, 6, 8, 9, 12 y 13, entre otros, de la citada Declaración.

## Conclusiones

Como resultado de la visita de verificación realizada al territorio binacional indígena de Wisuya/Buenavista y después de las revisiones y recomendaciones sugeridas por los peticionarios y sus representantes, la Defensoría del Pueblo de Ecuador concluye que:

1. Tanto el territorio colectivo denominado Resguardo Buenavista (Buenavista) como el territorio de posesión ancestral de San José de Wisuya, bajo jurisdicción de los Estados colombiano y ecuatoriano, respectivamente, conforman el territorio indígena binacional Siona de Wisuya/Buenavista, producido a partir de las históricas relaciones construidas a través del río Putumayo que antes de ser frontera es puente, fuente de abastecimiento y posibilita la dinámica territorial para sus habitantes.
2. En dicho territorio existe una forma de autogobierno propia conformada por el Consejo de Sabios, taitas y mamas que son fuente de sabiduría, espiritualidad y guía; dos Consejos de Gobierno como la máxima autoridad del Resguardo Buenavista y de la Comunidad de Wisuya, y de una Guardia Indígena como ejercicio amplio e integral del derecho a la autodeterminación para la protección del territorio binacional y como ejercicio del derecho a la resistencia.
3. Los Estados de Ecuador y de Colombia no han reconocido la existencia de este pueblo binacional ni garantizado efectivos procesos de integración que respeten los derechos colectivos indígenas pese a que existe la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana por casi 30 años.
4. El Estado ecuatoriano en el caso de San José de Wisuya no ha adjudicado gratuitamente las tierras de posesión ancestral que ocupan.
5. Este territorio ancestral enfrenta dos amenazas estructurales significativas: 1) la actividad de extracción de petróleo en la zona a cargo de las empresas Amerisur Resources PLC y Petroamazonas EP, y; 2) los impactos provocados por las operaciones de grupos armados irregulares que se disputan el control del territorio para actividades ilícitas de coca, minería y madera así como las operaciones de los ejércitos ecuatoriano y colombiano.
6. Las operaciones petroleras de Amerisur Resources PLC y de Petroamazonas EP no han garantizado la consulta previa, libre e informada ni cuentan con la autorización del territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista. Su actividad amenaza con afectar el derecho a vivir a un ambiente sano así como derechos de la naturaleza.
7. Las operaciones de los ejércitos de Colombia y Ecuador, a veces derivan en hostigamientos, amenazas y ataques a los habitantes de las propias comunidades provocando inseguridad a la población que se encuentran en el medio de sus operaciones contra los grupos armados irregulares.



8. Sus habitantes, personas, familias y comunidades enfrentan diversos hostigamientos, amenazas y ataques que incluyen limitaciones y restricciones a la libertad de tránsito, militarización del territorio, imposición del deber de colaborar con los grupos armados irregulares para determinadas actividades, amenazas de muerte a dirigentes y representantes, reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nuevos procesos de minado (MAP) así como el olvido de artefactos explosivos improvisados (AEI).
9. Los hechos violentos y graves que enfrentan suceden a ambos lados de las riberas del Río Putumayo, límite geográfico entre Ecuador y Colombia y afectan por igual a sus habitantes y la comunidad en su conjunto.
10. Sus efectos no son exclusivamente físicos en relación a los derechos a la integridad y la vida, sino que también afectan a los derechos colectivos culturales con especial impacto en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
11. Estos territorios enfrentan la ausencia estructural del Estado en términos del ejercicio de derechos económicos y sociales. Existen omisiones en la garantía de los derechos de educación y salud, si bien hay escuelas y puestos de salud, estos servicios no garantizan la calidad en términos de disponibilidad ni de interculturalidad. Así mismo los servicios básicos de energía eléctrica y comunicación son deficientes. Esto agrava la situación de inseguridad y confinamiento del territorio.
12. Esta Defensoría del Pueblo también concluye que el riesgo que enfrentan las personas que viven en Wisuya a sus derechos a la vida e integridad implica una situación grave, urgente y de posible irreparabilidad, en los términos que ha planteado la CIDH en relación al Estado colombiano y el territorio de Buenavista.
13. En su conjunto, el confinamiento y las graves amenazas existentes y su posible irreparabilidad permiten a esta Institución Nacional de Derechos Humanos confirmar que el pueblo Siona de Wisuya/Buenavista enfrenta riesgo de exterminio.

## **Recomendaciones y disposiciones**

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de este informe, expresamente reconoce al territorio de la Comunidad San José de Wisuya y al territorio del Resguardo Buenavista como un territorio binacional colectivo indígena y así mismo reconoce, en base al derecho a la autodeterminación, a las formas de organización y autoridades de ese territorio, es decir, al Consejo de Sabios, a los Consejos de Gobierno existentes y a la Guardia Indígena, a quienes agradecemos también por la acogida y protección física y espiritual brindada en el territorio.

Así mismo, y en concordancia con lo previsto en el Artículo 215 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, recomienda y dispone:

#### **Al Estado Ecuatoriano:**

- Se insta al gobierno nacional a tomar acciones urgentes e inmediatas frente a la grave situación de derechos humanos que vive el territorio indígena binacional Wisuya/Buenavista, las cuáles debe incluir:
  - Que la Secretaría de Derechos Humanos conforme una comisión interinstitucional que aborde de manera integral la situación descrita en este informe tendiente a garantizar la paz en el territorio y coordinar las recomendaciones que se emiten. Se recuerda que cualquier plan o programa que se realice en el marco de esta comisión interinstitucional deberá realizarse en consulta y con la participación de las autoridades de Wisuya/Buenavista en concordancia con el artículo 57 numeral 17 de la Constitución. La Defensoría del Pueblo queda a disposición de la Secretaría para presentar el informe y actuar como veedor en la comisión que se cree.
  - Que la Secretaría de Gestión de la Política reconozca jurídicamente a la Comunidad Indígena San José de Wisuya y a su estructura organizativa, incluyendo la Guardia Indígena, de acuerdo a sus procedimientos.
  - Que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Gestión de la Política, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Derechos Humanos, reconozcan y respeten el ejercicio de autodeterminación y protección del territorio que ejerce a través de la Guardia Indígena como parte de la organización social propia de Wisuya/Buenavista, tal como ya lo ha hecho el Estado Colombiano.
  - Que el Ministerio del Ambiente y la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería agilicen la adjudicación inmediata y gratuita el territorio colectivo de posesión ancestral de la Comunidad de San José de Wisuya, limitando los efectos de la declaratoria realizada de bosque protector a la zona, así como a la franja de seguridad fronteriza prevista que vulneran los derechos colectivos a la propiedad y posesión ancestral del territorio.
  - Que la Secretaría de Derechos Humanos con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a que proceda a retirar, en consulta y con autorización de las autoridades de la Comunidad San José de Wisuya los artefactos explosivos improvisados (AEI) que se encuentran en su territorio, así como entregue información actualizada sobre la situación de minas anti persona (MAP) que podrían afectar al territorio de dicha comunidad.
  - Que los Consejos Nacionales para la Igualdad Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades y de Movilidad Humana, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía

General del Estado, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, tomen acciones urgentes frente a los hechos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que se reportan en la Comunidad San José de Wiusya para prevenir e investigar los casos reportados en la zona así como intentar procesos de búsqueda de los niños, niñas y adolescentes reclutados.

- Que la Dirección General del Registro Civil, Indentificación y Cedulación, al amparo del reconocimiento del territorio binacional indígena de San José de Wisuya/Buenavista, realice de manera inmediata las brigadas suficientes para garantizar el derecho a la identidad de sus habitantes, en especial de niños, niñas y adolescentes, independientemente de las zonas del territorio en que regularmente habitan.
- Que los Ministerios del Interior y de Defensa dispongan a la Policía Nacional y el Ejército Nacional la limitación de actividades de la fuerza pública en el territorio y que, en caso de que sean necesarias, siempre y sin excepciones pidan autorización para el ingreso al territorio de la Comunidad San José de Wisuya y coordinen sus operaciones con las máximas autoridades del territorio, incluyendo a la Guardia Indígena.
- Que el Ministerio de Relaciones Exteriores impulse, dentro del proceso de integración fronteriza con Colombia, el reconocimiento de ambos Estados del pueblo binacional indígena Wisuya/Buenavista y se construyan planes específicos de integración con un enfoque de derechos humanos y guiados por el artículo 423 de la Constitución. Se recomienda adicionalmente que se amplíe esta medida a todos los pueblos binacionales indígenas existentes en las fronteras de Ecuador con Colombia y Perú. Los procesos de integración de estos pueblos deberán garantizar la consulta previa, libre e informada reconocida en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución.
- A las empresas Petroamazonas EP y Amerisur Resources, esta última delegataria y concesionaria del Estado, a cumplir con la normativa nacional vigente y estándares internacionales de derechos humanos respecto del ejercicio de derechos humanos colectivos, en especial el de consulta previa, libre e informada. Se insta además a cumplir con las recomendaciones realizadas en la resolución defensorial No. 003-DPE-DNDCNA-2018-MP, de 24 de agosto de 2018, emitida por la construcción del OBA y conexión con la RODA.

Se solicita a todas las instituciones del Estado a informar sobre el inicio de acciones para el cumplimiento de estas recomendaciones en el plazo de 15 días a partir de la notificación que se realice.

#### **A la Defensoría del Pueblo de Colombia:**

- Exhortar a la Defensoría del Pueblo de Colombia a que promueva, a través de las autoridades competentes de ese país, procesos de integración bajo la misma lógica



planteada en esta recomendación a la Cancillería ecuatoriana, así como procesos de registro de identidad para toda la población binacional de Wisuya/Buenavista.

**Disposiciones internas:**

- Que el presente informe sea notificado a las autoridades del territorio Wisuya/Buenavista y a sus representantes a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos.
- Que la Dirección General Tutelar y la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Ambiente y de la Naturaleza soliciten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de la comunidad indígena kichwa y siona de San José de Wisuya respecto del Estado Ecuatoriano, en relación a la Resolución No. 53/2018 de 14 de julio de 2018 por la que otorgó medidas cautelares (No. 395-18) a los Resguardos de Buena Vista y Santa Cruz de Piñuna Blanco, respecto de Colombia.
- Al Delegado Provincial de Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador a que realice el seguimiento al presente informe en coordinación con la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Ambiente y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Gina Benavides Llerena  
**DEFENSORA DEL PUEBLO DE ECUADOR (e)**

<b>Elaborado por:</b>	Francisco Xavier Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza
<b>Revisado por:</b>	Consejos de Gobierno de Wisuya y Buenavista; Silvana Sánchez, representante del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Sucumbíos, y; Amazon Frontline Defenders.
<b>Aprobado por:</b>	Gina Benavides Llerena, Defensora del Pueblo de Ecuador, encargada
<b>Fecha:</b>	10 de enero de 2019.